



¡Wert vete ya!

Fuera la LOMCE, el tasazo y el decreto de becas

El 20-N volvemos a las calles: huelga general estudiantil _____ CONTRAPORTADA y pág. 7

Fagor

Pág. 13

¡Nacionalización bajo control obrero!

¡Nou no se cierra!

Pág. 11

Los trabajadores de RTVV se rebelan y toman la dirección de la radiotelevisión valenciana

CCOO y UGT en una encrucijada histórica _____ Editorial y páginas centrales

Mónica Iglesias

387 inmigrantes mueren en la costa de Lampedusa (Italia)

Estalla la indignación contra el gobierno y sus leyes represivas

Hace poco más de un mes, el jueves 3 de octubre, una barcaza con más de 500 personas a bordo se hundía frente a las costas de Lampedusa¹ tras incendiarse la precaria embarcación en la que viajaban. 387 inmigrantes entre hombres, mujeres y niños perdían la vida miserablemente. La magnitud de la tragedia ha puesto en primer plano el drama que viven cotidianamente estas personas, ante la indiferencia del gobierno italiano, y del resto de gobiernos europeos, cuyo único objetivo es “blindar” sus fronteras frente a los miles de seres humanos que diariamente huyen de la represión que padecen en sus países de origen² y también del hambre y la miseria, provocada por el sistema capitalista y sus multinacionales.

Como señala Pablo Ceriani, coordinador del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús: “Entre las causas que empujan a miles de migrantes que deciden abandonar sus países” se encuentra el que “la explotación de los recursos africanos está en muchísimos casos en manos europeas, generando una salida de riquezas que no quedan disponibles para la población local”.

Una de las cuestiones que más indignación ha generado, no sólo en la isla sino en toda Italia, ha sido la actitud de las fuerzas de rescate en el momento del naufragio. Pese a la gravedad de la situación, dos lanchas motoras de la Guardia de Finanzas permanecieron atracadas en el muelle de Favalaro. “La gente se moría en el agua mientras ellos pensaban en hacer fotografías y vídeos. Tenían que pensar en sacar a las personas. Nosotros los hacíamos subir de cuatro en cuatro. Cuando mi barco estaba lleno de inmigrantes y pedimos a los agentes que los subieran a bordo, decían que no era posible, que tenían que respetar el protocolo”, denunció Vito Fiorino, pro-

pietario de uno de los pesqueros que acudió al rescate de los inmigrantes a la vez que desafió a las autoridades a que le aplicaran la ley que penaliza a quien ayuda a indocumentados a llegar a Italia. Una muestra evidente del grado de rabia y rechazo a esta ley reaccionaria.

Cínicamente, el gobierno italiano (encabezado por Enrico Letta, del socialdemócrata Partido Demócrata y del que forma parte decisiva el PdL de Berlusconi) concederá ahora la nacionalidad a los inmigrantes muertos, que serán “enterrados como europeos”, mientras que los supervivientes de la tragedia, a los que ni siquiera se les permitió asistir al funeral de sus compañeros y familiares, podrían enfrentarse a multas de hasta 10.000 euros y a la deportación fulminante, sobre la base de la reaccionaria ley de inmigración italiana. Esta ley es un mazazo más para unas personas que se enfrentan a todo tipo de peligros, sin saber la suerte que correrán a manos de las mafias, ya que el transporte ilegal de personas es sólo el lado “amable” de este negocio³.

Leyes de inmigración xenófobas y represivas que hay que tumbar

La llamada ley “Bossi-Fini”, aprobada en 2002 por el partido de Berlusconi, prevé el delito de “complicidad con la inmigración clandestina” para quien lleve a Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable, por tanto, a quienes les socorran en el mar, como lo han hecho en esta ocasión los pescadores de Lampedusa. De hecho, al

menos tres grandes pesqueros pasaron de largo sin auxiliar a las víctimas para evitar ser acusados de favorecer la emigración clandestina, lo que podría conllevar penas de prisión, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones⁴.

De la misma manera, el “delito de inmigración” introducido en la legislación en 2009, también por el partido de Berlusconi y la ultraderechista Liga Norte, contempla la sanción de cualquier persona en situación irregular con multas que van desde los 5.000 a los 10.000 euros. Además obliga a los funcionarios públicos, salvo a médicos y directores de escuela, a denunciar a los indocumentados. Esta reaccionaria ley asquea a buena parte de la sociedad italiana, y muy particularmente a los habitantes de Lampedusa, a quienes pretende convertir en delatores y cómplices de las autoridades. La propia alcaldesa de Lampedusa exigía con contundencia: “La Liga Norte no es otra cosa que una panda de gentuza que ha infectado de odio nuestro país. (...) Hace falta reaccionar como con una vacuna: los anticuerpos deben aislar a la Liga”. Al mismo tiempo manifestaba su desprecio por las autoridades italianas y europeas que visitaron la isla, haciéndose eco del sentir general: “No sabemos dónde meter ni a los vivos, ni a los muertos”, con un centro de acogida con capacidad para 300 personas en el que actualmente se hacían casi 1.400. “¡Basta! ¿A qué estamos esperando? Lo que está pasando en Lampedusa es un horror continuo (...) le digo a Barroso y a quien le acompañe del Gobierno ita-

liano que si vienen a dar condolencias... también lo pueden mandar por email. Si vienen aquí deben venir a decirme qué cosas están cambiando, qué cosas quieren cambiar del destino de estas personas que hacemos morir así (...) mi comunidad podría hacer mucho más y mucho mejor de lo que hace el Estado haciendo dormir a los niños en el suelo”.

Y es que esta brutal tragedia (la tercera que ocurría en pocas semanas) ha desatado la rabia de los habitantes de Lampedusa, impotentes ante la sangría de vidas humanas que presencian cotidianamente. No es de extrañar que, tanto el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, como el primer ministro italiano, Enrico Letta, hayan sido recibidos con abucheos e insultos por parte de sus habitantes, al grito de “asesinos” y “vergüenza”. Para salir del paso, el primer ministro Letta, manifestó no compartir la actual ley sobre inmigración italiana. Sin embargo, desde que está al frente del gobierno, no ha dado ningún paso práctico para su derogación ya que esto comprometería el pacto de gobierno del PD con el PdL de Berlusconi.

Hipocresía de la burguesía europea

No obstante, y por encima de las lágrimas de cocodrilo de los gobernantes italianos y europeos, la represión y el cierre de fronteras continuará siendo la piedra angular de la política europea en materia de inmigración. El gobierno de Letta anunció la insta-

Deportaciones de inmigrantes en Francia La deriva xenófoba del gobierno de Hollande

Ana Sanjuán

La detención el pasado 9 de octubre de la joven de 15 años de edad, Leonarda Dibrani, cuando se encontraba a bordo de un autobús escolar y su deportación forzosa a Kosovo junto al resto de su familia causó un hondo impacto e indignación en todo el mundo y por supuesto, también en la sociedad francesa, especialmente entre la juventud. Esta acción repulsiva revela hasta qué punto la socialdemocracia asume como propia la política de la burguesía, incluso en aspectos en los que pretendía distinguirse más claramente de la derecha. ¿En qué se diferencia el trasfondo político reaccionario de esta acción con las leyes de inmigración aprobadas por Berlusconi y la Liga Norte en Italia?

La deportación de Leonarda se enmarca en la deriva racista y xenófoba del gobierno de Hollande. El ministro de interior, Manuel Valls, no tiene ningún tipo de reparo en expresar públicamente sus ideas racistas y su intención de expulsar a todos los gitanos del país. Sólo en los primeros seis meses de este año ha deportado a 10.000 romanes. Como en otros países europeos, Hollande y su gobierno están utilizando a los

inmigrantes como chivos expiatorios de la crisis social a la que se enfrenta el país.

Utilizando el secularismo como bandera, el gobierno ha desatado una campaña que ha puesto en el punto de mira a los más de cinco millones de musulmanes que viven en Francia. El pasado mes de septiembre se aprobó una nueva ley que prohíbe a los estudiantes de los centros de estudios públicos llevar “símbolos o vestimentas que exhiban su fe religiosa”. En Francia hay más de doce millones de árabes, este tipo de medidas xenófobas y campañas racistas tienen como objetivo dividir a la clase obrera francesa en líneas religiosas y étnicas, además de intentar desviar la atención de otras cuestiones más importantes, como son los efectos de los recortes económicos aplicados por el gobierno.

Los estudiantes toman las calles

Unos días después de la detención de Leonarda ocurrió algo similar con la expulsión del país de un joven estudiante armenio de 19 años de edad, Khatchik Khachatr. Estas deportaciones desataron la indignación popular, decenas de miles de estudiantes de secundaria pararon las clases, ocuparon y bloquearon más de 170 institutos, apilando contenedores y construyendo barricadas en



las puertas de los centros de estudio para evitar la entrada de la policía y se manifestaron masivamente por todo el país. A las manifestaciones, que se sucedieron durante varios días, acudieron no sólo estudiantes, sino muchos trabajadores y jubilados. Además de la exigencia fundamental del fin de las deportaciones, estaba la de la dimisión del ministro de Interior.

Las protestas estudiantiles obligaron a Hollande a comparecer ante las cámaras de televisión. Por supuesto defendió la acción

de las autoridades y ratificó a su ministro de interior, aunque para intentar calmar los ánimos entre los estudiantes invitó a la joven Leonarda a que regresara a Francia, pero sin su familia. Esta “generosa” oferta sólo sirvió para aumentar la indignación.

Nuevas medidas de austeridad

Un día después de la deportación de Leonarda, el gobierno presentó los nuevos presupuestos que son un ataque más a la cla-

lación de una fuerza militar de “carácter humanitario” que patrullará el Mediterráneo y contará con barcos, aviones y hasta drones o aviones no tripulados para cumplir con su función: “...serán detectados y rescatados. Una vez que eso sucede, los migrantes podrán ser devueltos, aunque muchas veces es difícil, por ejemplo, en el caso de los miles que huyen actualmente de la guerra en Siria”.

Por su parte, la cumbre de jefes de gobierno celebrada en Bruselas estos días ha rechazado adoptar ninguna medida concreta, salvo la decisión de reforzar la coordinación entre los estados para interceptar a los inmigrantes antes de que puedan alcanzar las costas europeas. De esta forma, el drama de la inmigración y la sangría de vidas a las puertas de Europa no tendrán solución de la mano de las “democracias” occidentales, a quienes la vida y la muerte de estas personas les importa muy poco. Como en el resto de los grandes problemas que asolan la sociedad, deberemos ser los trabajadores con nuestra lucha consciente quienes labremos un futuro de dignidad y de esperanza para la mayoría de la humanidad, por encima de los intereses de una minoría privilegiada, que cada día condena a la miseria a millones de seres humanos en todo el mundo.

1. Isla de apenas 20 kms. cuadrados y 5.000 habitantes convertida en la puerta de entrada a Europa para africanos, fundamentalmente tunecinos, eritreos y somalíes, estos dos últimos a través de Libia.
2. Desde que Eritrea se separó de Etiopía y proclamó la independencia, hace dos décadas, ha ido degenerando en un régimen de terror, donde el trabajo forzado para la mayoría de la población se combina con la represión más brutal del gobierno.
3. El otro es la trata de personas. Los casos más crudos hablan de mujeres que son violadas en Marruecos para llegar a Europa embarazadas y lograr así no ser deportadas, otras obligadas a ejercer la prostitución debido a la amenaza de los tratantes a sus familias en los países de origen, incluso niños sometidos a trabajo infantil o tráfico de órganos.
4. En el año 2007 siete pescadores tunecinos rescataron a 44 supervivientes de un naufragio, trasladándolos a Lampedusa. El tribunal de Agrigento los acusó de “ayudar a la inmigración ilegal”.

se obrera. El objetivo es reducir el déficit presupuestario del 4,1 al 3,6% del PIB. Para conseguirlo proponen reducir el gasto público en 15.000 millones de euros. Los recortes afectarán a los trabajadores del sector público que por cuarto año consecutivo tendrán congelación salarial. La Seguridad Social tendrá un recorte de 6.000 millones de euros, entre ellos 2.900 millones del sistema sanitario, cuando ya muchos hospitales y centros de salud están denunciando la falta de suministros y personal. Además de los recortes, el gobierno quiere recaudar 3.000 millones de euros extras a través de impuestos como el IVA, una medida que afectará fundamentalmente a las familias trabajadoras cuyo poder adquisitivo ya ha sido mermado tras el aumento del 11% del precio de alimentos y electricidad de enero a septiembre de 2013. Mientras, los empresarios quedarán exentos de las nuevas subidas de impuestos. Estos recortes llegan después de la reforma de las pensiones que incrementa la edad de jubilación y los años necesarios de cotización, y que sacó a decenas de miles de trabajadores a las calles el pasado 10 de septiembre. Estos nuevos presupuestos y medidas siguen la línea de los ataques masivos contra los derechos y condiciones de la clase obrera en todo el continente. Llegan, además, en un momento en que empresas como Air France, Michelin o Danfoss han anunciado miles de despidos, creando las condiciones para una nueva explosión social en Francia.

Espionaje masivo o la farsa de la democracia burguesa

María Castro

No hay delito, absolutamente ninguno, que no pueda ser tolerado cuando 'nuestro' lado lo comete.

(George Orwell, 1984)

Las noticias sobre el espionaje masivo llevado a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EEUU reveladas por Edward Snowden, antiguo contratista privado de la agencia, no son una sorpresa. Confirman que el espionaje es un instrumento utilizado por todos los Estados para controlar y vigilar no sólo a otros países, rivales o “aliados”, sino que se extiende a sus propios ciudadanos.

Lo significativo de estas últimas revelaciones son los métodos y el alcance de dicho espionaje, cómo EEUU y el resto de países utilizan toda la red de comunicaciones, interceptando desde llamadas telefónicas a correos electrónicos de cientos de millones de personas en todo el mundo. Pero también el hecho, nada insignificante, de que todo esto haya salido a la luz sin que hayan podido impedir que salga a la luz.

Mientras que los distintos gobiernos europeos y latinoamericanos víctimas de este espionaje han puesto el grito en el cielo (ya sea Angela Merkel, François Hollande o Dilma Rousseff) y la mayoría de medios de comunicación dedican sus páginas a este aspecto del escándalo, demuestran escasa preocupación por el espionaje masivo a sus propios ciudadanos. Como explicaba el eurodiputado de IU, Willy Meyer: “La reacción de sorpresa de la mayoría de los estados de la UE ante el espionaje es hipócrita. Más, cuando los servicios de seguridad de la UE están subordinados a los de EEUU por decisión de Europa (...) El Parlamento Europeo ya avisó a los estados miembros en 2001 sobre la red espía de EEUU (...) que se usaba para interceptar comunicaciones, y desde ese año los Estados conocían la existencia de esta herramienta” (*Público*, 30/10/13).

Colaboración de los servicios de inteligencia nacionales

Finalmente se supo que todo el entramado de espionaje de la NSA a decenas de millones de personas es posible gracias a la colaboración de los distintos servicios de inteligencia nacionales, quienes interceptan datos en su propio territorio y son enviados después a la NSA. Dos de los países señalados son Francia y el Estado español. En el caso francés, el periódico *Le Monde* reveló que en apenas 30 días, del 10 de diciembre de 2012 al 8 de enero de 2013, la NSA interceptó más de 70 millones de llamadas telefónicas y mensajes SMS (fundamentalmente de las dos principales empresas de telefonía francesas, Wanadoo y Alcatel) tanto de empresas como de particulares. Para esta ardua tarea EEUU contó con la colaboración de la agencia de inteligencia francesa, la DGSE.

En el caso del Estado español, el periódico *El País* informaba que el CNI entregó a la NSA más de 60 millones de registros de llamadas y mensajes, que abarcaban sólo el mes de diciembre de 2012. Pretenden hacernos creer que se trata de un procedimiento rutinario y aleatorio, pero como revelaron las últimas filtraciones del grupo *Anonymous* sobre las activida-



des de lo que se conoce como el CNI catalán, el CESICAT, durante el mes de mayo de 2012, el espionaje se centró en activistas de izquierdas y sociales, además de periodistas, y se hizo un seguimiento exhaustivo de todo lo relacionado con campañas sociales, desde la lucha contra el escándalo de Bankia al movimiento 15-M.

'El Gran Hermano te vigila' (G. Orwell, 1984)

Cuando en 1949 George Orwell publicó su genial obra *1984*, originalmente una crítica al control férreo, asfixiante y antidemocrático de la sociedad que ejercía el estalinismo, nada parecía augurar que se convertiría en un presagio de lo que sería el futuro bajo el capitalismo medio siglo después. El alcance del nivel de vigilancia al que están sometidas las personas es escalofriante. Según publicaba el 20 de agosto, el sistema de vigilancia de la NSA alcanza a “prácticamente el 75% de todo el tráfico de Internet en EEUU”. La NSA “retiene el contenido escrito de los correos electrónicos enviados entre ciudadanos dentro de EEUU” y “escucha llamadas telefónicas domésticas hechas con tecnología de Internet”. Snowden comunicó a la Unión Americana de Libertades Civiles que todo el tráfico de Internet que sale de las fronteras norteamericanas pasa por la NSA y ningún teléfono hace una llamada sin dejar rastro en dicha agencia.

Mientras millones de norteamericanos sufren los efectos de los recortes sociales el gobierno destina cada año miles de millones de dólares a los servicios de inteligencia. Desde 2001 ha gastado en ellos más de 500.000 millones de dólares, más de cien millones al día. Solo la CIA gasta anualmente 1.700 millones en la recogida de datos. El nivel tecnológico también es tremendo, solo la NSA tiene una capacidad de procesar diariamente 20.000 millones de “registros”, no sólo llamadas telefónicas, también visitas a páginas web, SMS y correos electrónicos, además es capaz de captar códigos bancarios, transacciones comerciales, votos registrados electrónicamente o localizaciones GPS.

Wikileaks y ahora las revelaciones de Snowden arrojan luz sobre el entramado de servicios de información y espionaje utilizados por el sistema capitalista. También son una prueba del incremento de la rivalidad entre las distintas potencias imperialistas que se agudiza en época de crisis eco-

nómica, cuando cada una lucha por el control de los mercados y el acceso a materias primas baratas para competir en mejores condiciones que sus rivales.

La excusa de la seguridad

Tras los atentados del 11-S la administración norteamericana y sus aliados han utilizado la “lucha contra el terrorismo” como excusa para involucrarse en guerras como las de Iraq, Afganistán o Libia y aprobar leyes que recortan los derechos democráticos en sus respectivos países. A pesar de dedicar miles de millones de dólares al espionaje y contar con una red que llega prácticamente al rincón más recóndito del planeta no impidieron, por ejemplo, el asesinato de 92 miembros de las juventudes socialistas en Noruega a manos del fascista Breivik. Como luego quedó en evidencia, los servicios de inteligencia noruegos y extranjeros conocían desde hacía tiempo sus actividades.

El espionaje masivo realizado por todos los estados capitalistas revela el absoluto desprecio de la burguesía hacia cualquier tipo de formalidad legal cuando se trata de defender sus intereses. Eso sí, cuando se trata de reprimir a la clase obrera y a las organizaciones que luchan, aplican en nombre de la “democracia” todo el peso de la ley que ellos mismo violan continuamente. Los servicios secretos están fuera de cualquier tipo de control, son un instrumento fundamental al servicio de la oligarquía nacional de cada país. La burguesía argumenta que “hay que sacrificar la derechos por la seguridad”, pero realmente la causa fundamental de la inseguridad para la inmensa mayoría de la gente, en todo el mundo, es el propio capitalismo, un sistema al que le es inherente la guerra, las crisis económicas devastadoras, la represión y la violencia de todo tipo.

Lógicamente, la burguesía utiliza el desarrollo de la tecnología, especialmente de internet y de la telefonía, que ha suministrado una base material para ampliar y facilitar el espionaje del Estado. Sin embargo, pese a toda la información que la burguesía pueda obtener sobre la actividad social y política, que hay que rechazar y denunciar contundentemente, hay una perspectiva que jamás podrán evitar: la descomposición del capitalismo, el auge de la rebelión social y el triunfo de la lucha organizada y consciente de millones de personas contra este sistema caduco.

El Tribunal de Estrasburgo se posiciona contra la doctrina Parot

La derecha se moviliza contra el proceso de paz en Euskal Herria

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo se ha pronunciado contra la llamada doctrina Parot y falló el 21 de octubre que el alargamiento de la permanencia en prisión de presos de ETA que han cumplido su condena vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. También le ha recordado al gobierno del PP que la sentencia

es vinculante, que sienta jurisprudencia y que el Estado español se comprometió a acatar los fallos. Por unanimidad, los 17 magistrados de la sala del tribunal de Estrasburgo consideraron que las resoluciones de los tribunales del Estado español habían vulnerado el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho a la libertad y a la

igualdad. Además, señalaron que la sentencia del Tribunal Supremo español se aplicó de forma retroactiva y la Constitución española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las normas. Por tanto, como ha sentenciado el Tribunal de Estrasburgo, la doctrina Parot atenta contra la propia Constitución española.

Imanol Aranbarri

Dicho esto, este tribunal burgués no hubiera tomado tal decisión si no fuera por la fuerza y presión demostrada en la calle, con continuas movilizaciones semanales y manifestaciones masivas de más de 100.000 personas contra las leyes de excepción aplicadas de manera arbitraria a los presos de ETA, en un contexto de abandono de las armas definitivo y cuando la izquierda abertzale ha apostado decidida y públicamente por la lucha política y el rechazo a la lucha armada.

¿Qué es la doctrina Parot?

La doctrina Parot se implantó durante el gobierno del PSOE y después de que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, defendiera la política de “construir imputaciones” contra los presos que fueran cumpliendo sus condenas, para impedir que salieran a la calle.

Hasta el 20 de febrero de 2006 el conjunto de condenas de un preso se unificaban en una de 30 años, el máximo contemplado por la ley hasta ese momento, y las redenciones por trabajos u otros motivos se descontaban sobre esa pena máxima de 30 años. Sin embargo, en la mencionada fecha el Tribunal Supremo dictó la sentencia 197/2006, sobre un recurso interpuesto por Henri Parot, *Unai*, e inauguró una nueva forma de aplicar las redenciones, que se contabilizaban sobre cada una de las condenas impuestas y no sobre el total. Lo que resultó fue un alargamiento de la condena hasta la aplicación efectiva de la pena máxima de 30 años. La doctrina Parot suponía en la práctica la cadena perpetua, una me-



Inés del Río sale de la cárcel acompañada de su abogada y familiares

trata brutal a la que se sumaba la política de dispersión mantenida desde hace más de 20 años, o el mantenimiento en prisión de los presos políticos gravemente enfermos.

Desde su entrada en vigor ha sido utilizada contra unos cien presos de ETA. Hay varios casos de presos y presas que debían haber sido excarcelados en 2009 y que tienen fijada su salida de prisión para nada menos que 2021. También se han dado varios casos de personas a las que se les ha aplicado la prolongación de la condena cuando se encontraban ya en libertad, por lo que se dictaron contra ellas nuevas órdenes de detención.

El Tribunal de Estrasburgo no ha sido el único en afirmar que dicha doctrina vulnera derechos fundamentales. En el Estado español, lo ha hecho el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez. La Asociación de Juristas Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH) emitió una nota en la que afirmaba que la negativa del Gobierno es-

pañol a poner en libertad a los presos que padecen enfermedades graves y la aplicación de la sentencia 176/2006, la doctrina Parot, suponen una “violación de la legislación española e internacional”.

Los ataques a los derechos democráticos se recrudecen

La política de recortes de derechos sociales y políticos que se está dando en todo el Estado, se refleja también en el ataque a las libertades democráticas, desde el endurecimiento de la legislación contra los presos de ETA que han cumplido condena (como una forma de entorpecer y sabotear el proceso de paz en Euskal Herria iniciado con el abandono de las armas), o con el encarcelamiento y procesamiento de activistas sindicales, como es el caso del compañero Diego Cañamero y los activistas del SAT. A esto se añade la constante criminalización de las protestas sociales, la impunidad de la represión policial, o las constan-

tes multas económicas contra los que participan en manifestaciones.

La derecha ha montado un brutal escándalo con la sentencia que niega legitimidad a la doctrina Parot. Hemos podido ver una manifestación en Madrid convocada por la AVT el domingo 17 de octubre, en la que incluso dirigentes del PP fueron abucheados al grito de traidores. Los organizadores de la concentración, conocidos por sus vínculos políticos con la extrema derecha, han realizado declaraciones incendiarias contra el proceso de paz, y cuando alguien les ha recordado que las víctimas del franquismo, que son decenas de miles, todavía no han tenido ninguna reparación ni económica ni legal por parte del gobierno, se han “indignado” por esta comparación.

El tribunal de Estrasburgo sólo ha reconocido la realidad: dentro de la legislación española y con la excusa de “luchar contra el terrorismo” se están violando gravemente los derechos democráticos. Hoy esa legislación se utiliza contra los presos de ETA, pero cada vez más se va ampliando a todos los que luchan por los derechos sociales y políticos de la mayoría. Como recientemente recordaba Ada Colau, la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), cuando los banqueros, los especuladores o los políticos de la derecha defraudan y roban a manos llenas, los procedimientos judiciales se prolongan eternamente y finalmente son absueltos; cuando una familia trabajadora no puede pagar una letra de su hipoteca al banco porque está en el paro, el banco ejecuta inmediatamente su desahucio, se envía a los representantes judiciales y a decenas de antidisturbios. Esta es la justicia de clase que tenemos.

Daniel Reyes
CCOO

No a la reforma del Código Penal

La reforma presentada por Gallardón *El Progre* tiene dos objetivos claros: fortalecer la capacidad represora del Estado y criminalizar tanto la pobreza como la disidencia. Para ello se sirve de dos mecanismos: la desaparición de las faltas y la desaparición del límite de duración de las medidas de seguridad (medida que complementa o sustituye a la pena a imponer, por ejemplo, la libertad vigilada o el internamiento en un centro de desintoxicación).

Aumenta la represión política...

La reforma responde a la voluntad del legislador de incluir en el Código Penal todas aquellas acciones en que se ha ido plasmando la protesta social en los últimos tiempos, para poder castigar incluso las pacíficas y meramente reivindicativas, como la ocupación de sedes de bancos o difundir convocatorias en las redes sociales.

La resistencia pasiva podrá considerarse delito de atentado a la autoridad, lo que podrá aplicarse por ejemplo contra los piquetes en una huelga. Además algunos hechos se consideran más graves si se cometen “en una manifestación o reunión numerosa”. Un nuevo artículo castiga la difusión pública de mensajes que in-

citen o refuercen la decisión de cometer un delito contra el orden público. Y para colmo, en los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, se extiende la protección al personal de seguridad privada que desarrolle actividades en cooperación y bajo el mando de las fuerzas de seguridad. ¿Estamos ante el inicio de la privatización de los cuerpos policiales?

La reforma introduce expresiones y conceptos amplios, ambiguos e interpretables, y elimina términos que concretan el delito, lo que aumenta la inseguridad jurídica y generaliza la arbitrariedad, ya que cualquier conducta puede ser susceptible de convertirse en delito. Por ejemplo, ¿qué se entiende por “reunión numerosa”? ¿Cómo se valora si un mensaje “ha reforzado” la idea de alguien de cometer un delito de desórdenes públicos? Por tanto, la reforma supone un ataque frontal a la libertad de expresión y al derecho de reunión y manifestación. También aumenta la indefensión, al introducir figuras absurdas como la de “malas compañías”. Aparece la prohibición de relacionarse con personas que puedan facilitar o inducir al condenado a cometer delitos, es decir, que si te detienen en una manifestación, el juez pue-

de prohibirte mantener contacto con tus compañeros del sindicato.

...la represión social...

El gobierno del PP apuesta por la vía punitiva para encarar los problemas sociales. La reforma de Gallardón aumenta las penas y la posibilidad de entrar en prisión ante la comisión de delitos menores. Se persiguen con especial saña los “delitos sociales” (aquellos derivados de situaciones de exclusión social), aumentando la respuesta punitiva y dificultando el acceso a beneficios penitenciarios.

Pero no se olvidan de lo suyo. La financiación ilegal de los partidos seguirá sin considerarse delito (hurtar una barra de pan sí), y el fraude fiscal sigue siendo delito sólo si supera los 120.000 euros, no pudiéndose acumular las cantidades defraudadas en distintos ejercicios fiscales para realizar el cómputo. Sin embargo, el fraude a la seguridad social (que potencialmente pueden cometer personas en situación de necesidad) es delito desde el primer euro, computándose las prestaciones indebidamente percibidas en los últimos cuatro años. Y como burla final, la “excusa absolutoria atenuada”: si un im-

putado por fraude fiscal paga lo que debe, no irá a la cárcel.

...y se criminaliza a los colectivos más vulnerables

La reforma criminaliza y persigue a los inmigrantes. Entre otras medidas, plantea la posibilidad de expulsar del país incluso a aquellos ciudadanos extranjeros regularizados que cometan un delito menor. Vuelve a ser delito el *top manta* y se criminaliza la solidaridad: el nuevo código penal penaliza el ayudar a un inmigrante sin papeles por motivos altruistas. Aún más sádica es la equiparación de la enfermedad mental con el concepto de peligrosidad. Gallardón pretende que, entre otras barbaridades, se pueda privar de libertad a un ciudadano por la mera suposición de que pueda cometer un delito en el futuro debido a su diagnóstico psiquiátrico.

Resumiendo: una reforma brutalmente reaccionaria que criminaliza a los más vulnerables, busca silenciar las protestas en los juzgados y que persigue a la persona en lugar de al delito. Tú verás lo que haces Mariano. Nosotros lo tenemos claro.

(Información detallada sobre esta nueva fascistada en nosomosdelito.net)

Dos años de ayuntamiento obrero en Villaverde del Río

Más de 350 trabajadores y jóvenes en el Mitin-Fiesta ¡Una política de izquierdas en beneficio de los trabajadores es posible!

El sábado 26 de octubre, el grupo municipal de Izquierda Unida y la agrupación local del PCE de Villaverde del Río (Sevilla) celebraron los dos años de ayuntamiento obrero con un gran Mitin-Fiesta, que se prolongó toda la jornada y al que acudieron más de 350 trabajadores y jóvenes de la localidad, de pueblos

cercanos como Brenes o La Rinconada, de Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Córdoba y de otras zonas del Estado. En un ambiente combativo y de entusiasmo, desde las 14 horas hasta bien entrada la madrugada, disfrutamos de las intervenciones de Diego Cañamero, secretario general del SAT, de los trabajadores del ayun-

tamiento, de miembros de IU de Villaverde y de otras asambleas, de Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, y de representantes de colectivos y organizaciones de la izquierda. Una demostración de fuerza y del apoyo creciente a las ideas del marxismo revolucionario en la base militante de Izquierda Unida.

El acto contó con los coordinadores de IU de Brenes y La Rinconada (Sevilla), y del representante de la asamblea de IU de Arriate (Málaga) que mostraron su apoyo al grupo municipal de IU y a la inmensa mayoría de los afiliados de la asamblea local que se han mantenido firmes en la defensa de un programa consecuente de izquierdas, asambleario y anticapitalista, basado en los métodos de la democracia obrera. El ejemplo del ayuntamiento de IU en Villaverde del Río de oponerse a los recortes sociales, vengan de donde vengan, exigiendo a los representantes de IU en la Junta de Andalucía que se nieguen a aplicarlos aunque suponga la ruptura del gobierno con el PSOE, ha provocado una persecución política contra estos compañeros desde la dirección provincial de IU Sevilla. Una caza de brujas antidemocrática, que cuenta con el rechazo frontal de la Asamblea de IU en Villaverde y de la Agrupación local del PCE, así como de más de mil militantes de IU y del PCE de todo el Estado, de activistas de CCOO, UGT, CGT, SAT, Sindicato de Estudiantes, Marea Verde, Colectivo de Interinos, activistas de la PAH, etc.

Además de los compañeros de IU de diferentes asambleas, en el mitin tomaron la palabra Sonia Yáñez en nombre de la agrupación local del PCE, compañeros del edificio ocupado La Corrala de Sevilla, del Comité de Parados de Cortes de la Frontera (Málaga), del Comité de Parados de Guadalajara, de la Asamblea de Parados de Vitoria-Gasteiz, de la asociación de represaliados del franquismo La Comuna, de activistas sindicales de la CGT, de CCOO y de UGT... Todos ellos insistieron en el ejemplo de lucha de IU de Villaverde del Río y en la oportunidad de extender esta experiencia en todas las zonas donde IU gobierna ayuntamientos. Especialmente destacada fue la intervención de las trabajadoras de la dependencia, que han conseguido volver a ser empleadas públicas gracias a la revocación de la privatización del servicio y la remunicipalización del mismo llevado a cabo por el grupo municipal de IU.

Diego Cañamero y Ana García

En representación de la Corriente Marxista EL MILITANTE tomó la palabra el compañero Juan Ignacio Ramos, que abordó la necesidad de defender el programa del marxismo revolucionario en Izquierda Unida. Mantenerse fiel a las aspiraciones de transformación social de IU, es decir, rebelarse contra los recortes sociales, contra el saqueo que los banqueros y el gobierno del PP están perpetrando a costa de las condiciones de vida de los trabajadores, y defender la sanidad, la educación públicas y las conquistas históricas del movimiento obrero, significa también combatir políticamente a todos aquellos arribistas que, al calor de los avances electorales de la organización, quieren convertir IU en una plataforma desde la que medrar y obtener prebendas. Más que nunca el futuro de IU como organización de masas de la clase obrera y la juventud, de la mayoría oprimida, está ligado a la defensa de las ideas del marxismo revolucionario, del socialismo, frente a los que apues-



Intervenciones de Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes (izqda.), y de Diego Cañamero, secretario general del SAT (dcha.)



tan por una IU socialdemócrata respetuosa con la lógica del capitalismo. El combate de IU de Villaverde del Río es parte de esta lucha y por eso recibe ataques burocráticos, ataques que, por otra parte, están demostrando el enorme apoyo a las ideas del marxismo en la base militante de IU, y especialmente en Andalucía donde la experiencia del gobierno de coalición con el PSOE en la Junta está sirviendo para poner de relieve la necesidad de una política diferente, auténticamente revolucionaria. Las ideas planteadas por el compañero Juan Ignacio fueron muy aplaudidas.

Inmediatamente después tomó la palabra Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, que emocionó y galvanizó a todos los asistentes con un discurso vibrante. Se refirió a la gran huelga general estudiantil del 22, 23 y 24 de octubre. "Hemos hecho historia; la suma de los estudiantes, profesores, los padres y madres, paralizó toda la enseñanza pública el 24 de octubre en una demostración de fuerza sin precedentes, con más de dos millones llenando las calles en más de setenta manifestaciones". Ana insistió en que la unidad en la lucha de toda la comunidad educativa, de la clase trabajadora y la juventud, puede hacer posible la primera gran derrota del Partido Popular. También denunció que "si algunos parlamentarios, como parece ser que pasa con los responsables del PSOE, están tentados de arrogarse una representación de la comunidad educativa que no les corresponde y sentarse a negociar con el PP cambios secundarios de la contrarreforma franquista (LOMCE), no lo vamos a aceptar. Al contrario, denunciaremos estas maniobras oportunistas que vienen de aquellos que en lugar de realizar una oposición contundente al PP, de llamar a la movilización para exigir la dimisión del gobierno, no hacen más que reclamar pactos de Estado y otorgarles balones de oxígeno en todas las oportunidades en que tienen ocasión".

Por último, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes mostró su total apoyo al grupo municipal de IU de Villaverde, a su labor al frente del ayuntamiento, y subrayó la implicación del Sindicato de Estudiantes en la campaña contra las expulsiones y su exigencia a los dirigentes federales de IU para que pongan fin a este atropello antidemocrático. La intervención de Ana fue interrumpida numerosas veces con aplausos. La lucha de la juventud estudiantil, de la juventud obrera, conectó con todos los presentes.

También se dirigió a los asistentes Diego Cañamero, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), mostrando su apoyo y solidaridad a Santiago Jiménez, alcalde de Villaverde del Río, y llamado a continuar la lucha contra las políticas reaccionarias del PP, y contra todos los gobiernos que aplican recortes. Cañamero denunció la brutal persecución de la que es objeto él y más de 800 militantes del SAT, a los que los tribunales capitalistas piden decenas de años de cárcel y a los que se ha multado con más de un millón de euros por sus acciones de protesta. Cañamero desenmascaró el doble rasero con el que se trata a los banqueros, a los especuladores y a los ladrones de cuello blanco, y a los jornaleros, los trabajadores en huelga, o las familias desahuciadas. Insistió en el valor de la unidad de la clase obrera y de sus organizaciones, una unidad que según el dirigente jornalero debe estar al servicio de la lucha, de la movilización y de la transformación social. El compañero Cañamero recibió una ovación tremenda por parte de todos los asistentes. La compañera Paky Bejarano, en nombre de los concejales de IU de Villaverde, leyó una resolución de apoyo a Diego y a todos los militantes del SAT sometidos a procedimientos judiciales, contra las órdenes de prisión, las multas y la represión de que son víctimas. La resolución fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la votaron a mano alzada.

En defensa de Izquierda Unida de Villaverde del Río

Para cerrar el mitin, Santiago Jiménez, alcalde de Izquierda Unida, se dirigió a todos en un discurso claro y contundente en defensa del ayuntamiento obrero y de su gestión contra los recortes, a favor del empleo público, y de la democracia obrera. Santiago insistió en que IU en el ayuntamiento ha demostrado que los trabajadores no necesitamos de los empresarios, ni de los gestores profesionales para llevar a cabo una política en beneficio del pueblo, de los oprimidos, de las familias obreras. Desgranó las conquistas sociales de estos dos años, y dejó claro que sí es posible enfrentarse a los recortes sociales, no aplicarlos, mostrarse insumisos con los ataques a la clase obrera, en definitiva ser coherentes con el programa de Izquierda Unida, a condición de basarse en la conciencia de la población y en su capacidad de movilización. IU de Villa-

verde del Río ha demostrado que es posible una política al servicio de los trabajadores en los hechos, no en palabras, y por eso es atacada por aquellos que piensan más en las prebendas institucionales, en los privilegios materiales, que en ser leales a un proyecto de transformación social.

Las palabras de Santiago Jiménez concluyeron con un reconocimiento a todos los compañeros que asistieron al acto y un compromiso firme de continuar la lucha en defensa de la democracia interna y de la coherencia política. Por último, la compañera Aguas Santas Méndez, concejal de IU, realizó un informe amplio de la campaña estatal contra las expulsiones y de los centenares de resoluciones de apoyo que han llegado de todos los rincones de la geografía, mostrando el enorme impacto que la política de IU de Villaverde del Río y de su grupo municipal está teniendo en toda la izquierda. También anunció los actos públicos de solidaridad con IU de Villaverde del Río que se realizarán en diferentes zonas del Estado, y que contarán con la participación de los concejales de IU de la localidad.

Tras el final del mitin pudimos disfrutar de un concierto que se prolongó hasta la madrugada con la participación de Lucía Sócam y los grupos A Sako Pako, Alpessa y JO.DT, que animaron tremendamente el final de una jornada inolvidable. El trabajo de los militantes de IU en el mitin, en la barra garantizando una atención extraordinaria, en la organización de todos los detalles del concierto, del alojamiento de los compañeros llegados de otras zonas, fue maravilloso. Un ejemplo de abnegación comunista y revolucionaria en las mejores tradiciones de nuestra clase. El próximo año nos veremos otra vez.

Actos públicos con Santiago Jiménez, alcalde de Villaverde del Río

- **Gijón:** jueves 7 de noviembre 19.00h · Ateneo de la Calzada.
- **Ferrol:** viernes 8 de noviembre 19.00h · Librería Marxista [C/ Pontevedra 18].
- **Vitoria:** jueves 14 de noviembre 19.00h · Centro Cívico Iparralde.
- **Madrid:** viernes 15 de noviembre 19.30h · Ateneo Republicano de Vallecas [C/ Arroyo del Olivar 79].

Visita la web del grupo municipal de IU de Villaverde del Río:
www.vozdelpueblo.org

Óscar Egido

Mientras el gobierno del PP insiste en que estamos saliendo de la crisis y que los recortes se acercan a su fin, sale a la luz el Plan Presupuestario para 2014 que ha enviado a Bruselas (para que de el visto bueno) y que incluye ajustes adicionales para ayuntamientos y comunidades autónomas de 17.500 millones de euros para los dos próximos años. El ministro Guindos tuvo la desfachatez de decir públicamente que no había “nada nuevo bajo el sol” en estos recortes que, sin embargo, habían sido mantenidos bajo el sigilo más absoluto durante el reciente debate sobre los presupuestos.

Aunque parte de esta cifra incluye medidas ya tomadas, como el repago farmacéutico o la no reposición de jubilaciones, esto en absoluto será suficiente. La única manera de obtener este “ahorro” es la que ya conocemos: una nueva oleada de recortes en sanidad, educación y servicios sociales, el cierre de empresas públicas despidiendo a miles de trabajadores y subidas en toda una serie de tasas e impuestos municipales y autonómicos, desde el de transmisiones hasta la entrada en las piscinas públicas.

Reforma de la Administración Local

Una parte esencial de todo este plan es la llamada reforma de la Administración Local, que bajo la excusa de eliminar duplicidades y racionalizar encubre un tremendo ataque contra los servicios sociales. Hay que tener en cuenta que ayuntamientos y comunidades autónomas son los encargados de gestionar no sólo educación y sanidad, sino la mayoría de políticas sociales (dependencia, renta básica, albergues...) muchas de las cuales son la última protección frente a la miseria.

La reforma de la Administración Local obliga a los ayuntamientos a abandonar las competencias que no le son propias. Por ejemplo, como Educación depende de las comunidades se podría obligar al cierre de escuelas municipales o a prohibir que, como está sucediendo en algunos casos, concedan becas o ayudas sociales para atenuar los recortes de otras administraciones.

El PP prepara una nueva tanda de recortes sociales



Otro punto importante es el establecimiento de la obligación de publicar el “coste efectivo” de los servicios públicos, lo que teóricamente cuesta ofrecerlos. Se justificarían así brutales subidas de tasas y precios públicos para cubrir ese “coste”, y además se obliga a traspasar el servicio público a otra administración que lo ofrezca más barato, por ejemplo la diputación provincial. Dado que la contabilidad de costes puede ser tan “creativa” como las demás ramas de la contabilidad, esto evidentemente abre la puerta a la privatización generalizada de los servicios públicos con la excusa de un menor coste que luego no será tal. Lo que sí se garantiza es el trasvase de millones de euros a los bolsillos de unos pocos y el empeoramiento generalizado de las condiciones de los trabajadores.

Una hecatombe social

Recientemente salía publicado el informe de Cáritas, entidad nada sospechosa de bolchevismo, que ponía de manifiesto la magnitud de la catástrofe social que viene sufriendo la inmensa mayoría de la pobla-

ción del Estado español, donde la diferencia de renta entre el 20% más rico y el 20% más pobre alcanza ya 7,5 veces, la cifra más alta de la UE. Según los datos de 2012, la pobreza severa se ha duplicado desde el inicio de la crisis, afectando a tres millones de personas, y el poder adquisitivo por habitante ha disminuido más de un 10%. Una cuarta parte de los niños españoles son pobres. La tasa de pobreza general ha pasado del 19,6% en 2008 al 21,1% en 2012, lo cual puede no parecer mucho pero se debe a que, debido al empobrecimiento general de la población (la renta disponible está por debajo del nivel de 2001), hace falta ganar menos de 613 euros al mes para ser considerado pobre mientras que en 2008 eran 646. Entre 2012 y 2013, según Eurostat, los salarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo real de 10 puntos porcentuales. Otros informes señalan cómo el desempleo sigue aumentando (el juvenil ya se acerca al 60%), hay más de 600.000 hogares sin ningún tipo de ingreso, miles de jóvenes tienen que abandonar los estudios y los indicadores sanitarios se desploman (sólo en 2012 la espera media para ser

operado pasó de 73 a 100 días, rebrotan con fuerza las enfermedades epidémicas...). El capitalismo es, como decía Lenin, “horror sin fin”.

Los ricos cada vez más ricos

Sin embargo, esta situación tiene unos claros beneficiarios. Los recortes al gasto social ni siquiera están evitando que la deuda pública siga creciendo. En 2014 superará por primera vez el 100% del PIB, aumentando así el lucrativo negocio de los bancos, que ya obtienen el 26% de sus ingresos del cobro de intereses al Estado (*Abc*, 30/10/13). Hay una clara relación entre la eliminación de las conquistas de la clase trabajadora y el trasvase de dinero al bolsillo de una minoría privilegiada. Según un estudio de Credit Suisse, los millonarios en el Estado español aumentaron un 13% entre mediados de 2012 y 2013, lo que significa 47.000 personas más, sumando un total de 402.000, con un patrimonio igual o superior al millón de euros.

Gente como Florentino Pérez (ACS), las hermanas Koplowitz (FCC), María del Pino (Ferroviario) o Villar-Mir (OHL) están expectantes ante el negocio de la privatización de servicios públicos de agua, limpieza, transporte o servicios sociales. Ante la caída de la construcción crece de nuevo uno de los negocios más tradicionales de la burguesía española, el saqueo de las arcas públicas, algo de lo que también saben Emilio Botín, los dueños de las eléctricas y la práctica totalidad de los que aparecen en la lista de las 30 familias que según la revista Forbes dominan la economía española acumulando fortunas obscenas: 32.000 millones de euros, de los cuales 11.200 millones están en posesión de tres familias.

Expropiar a este puñado de parásitos y poner al servicio de toda la sociedad, bajo control de los trabajadores, estos inmensos recursos es la única alternativa para terminar con el paro, la miseria y la desigualdad social que provoca el capitalismo.

Jordi Rosich

En la primera semana de noviembre el gobierno de CiU presentaba los presupuestos de la Generalitat para 2014 caracterizándolos como los del “fin de los recortes”. ERC los calificaba como los “más sociales” atribuyéndoles la virtud de “frenar los recortes de los años anteriores”. Así, ERC da un paso más en su proceso de implicación y respaldo a la política profundamente antisocial de la derecha a cambio del compromiso de CiU, cada vez más etéreo, de la celebración del referéndum por el derecho a decidir. De hecho, el 7 de noviembre, CiU hizo explícita, en el Parlament, su negativa a convocar un referéndum sin el acuerdo del PP.

Los presupuestos de la Generalitat son muy distintos a la versión oficial. Desde que CiU se hiciera con el gobierno de la Generalitat en 2011 ha recortado el gasto social por habitante en un 22%, haciéndolo retroceder en una década. El presupuesto de 2014 es una consolidación de los brutales recortes de los últimos tres años. El incremento en educación, sanidad y bienestar social es de un pírrico 0,2% con el que, por supuesto, no se alcanza el nivel de gasto social de 2010 y sí agrava una situación social cada vez más catastrófica.

Presupuestos de la Generalitat de Catalunya 2014

La farsa del ‘fin de los recortes’ de CiU

Pero, además, el presupuesto tiene trampa ya que la ejecución del gasto está ligada a un ambicioso plan de privatizaciones por valor de 2.328 millones. Si consiguen vender bienes y servicios públicos al sector privado por ese valor, será malo para los intereses de los trabajadores, ya sabemos bajo qué criterios funciona la gestión privada; y si no lo consiguen la reducción de los ingresos “previstos” será la excusa para imponer nuevos recortes sociales. O sea que los presupuestos encierran un nuevo ataque a los trabajadores “sí o sí”.

CiU y PP, responsables directos de una situación social catastrófica

Y todo esto se produce en una situación social cada vez más catastrófica. Los efectos de los recortes, el desempleo y los bajos salarios son sangrantes a principios de agosto el Sindic de Greuges —equivalente al Defensor del Pueblo— alertaba de que 50.000 niños sufren privaciones alimentarias en Catalunya y que la sanidad catalana había

registrado 750 casos de niños con síntomas de malnutrición. Hace un año la Diputación de Barcelona reconocía que un 57% de la población tiene dificultad para llegar a fin de mes y un 29,5% es pobre. Según el instituto de estadística de Catalunya, IDESCAT, en su “Estadística de distribución personal de la renta y de riesgo de pobreza”, el 26,4% de los catalanes menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza. Un porcentaje 8,8 puntos superior al que se registró en el 2008.

CiU, con el respaldo abierto de ERC, insiste una y otra vez en que estos presupuestos son “los únicos posibles” en estas circunstancias. Desvía su total responsabilidad de la situación social por las “imposiciones de Madrid” cuando realmente CiU ha sido el principal aliado del PP en la política de recortes y pérdida de derechos que ha llevado a un dramático empobrecimiento de la población, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. El apoyo de CiU a la reforma laboral y a la ley de Estabilidad Presupuestaria del PP, que prioriza el

pago de intereses a la banca sobre el gasto público, por poner dos ejemplos, fue entusiasta. No escucharemos a ningún líder de CiU clamar ni actuar contra el fraude fiscal en Catalunya que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, se eleva cada año a 16.000 millones de euros (mucho más que todo el presupuesto conjunto de Sanidad, Educación y Bienestar Social de la Generalitat).

Tanto el PP como CiU están utilizando la cuestión nacional para reforzar sus intereses de clase, que son los de la banca y de la gran empresa; para encubrir su política contra la clase obrera de todo el Estado. Detener la ofensiva de la burguesía pasa, por tanto, por tumbar con la movilización al PP del gobierno del Estado y a CiU del gobierno de la Generalitat, la convocatoria de elecciones anticipadas y la formación de gobiernos de izquierdas con una verdadera política de izquierda y anticapitalista a favor de la mayoría. Es la vía para que la crisis no la pague los trabajadores y se garantice el derecho a la autodeterminación de Catalunya.

20 de noviembre: Huelga general estudiantil ¡No a la LOMCE! ¡Fuera los recortes!



(VIENE DE LA CONTRAPORTADA)

Cifras similares en Aragón y Galicia, donde las manifestaciones de Zaragoza y Vigo han sido multitudinarias. En Extremadura, en Murcia, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Navarra, en Canarias, en Rioja, en Cantabria, la Marea Verde ha sido masiva. Cabe destacar las movilizaciones estudiantiles de la mañana del 24 de octubre en Vitoria-Gasteiz y Donosti, donde la huelga convocada por Ikasle Sindikatua ha tenido el apoyo en las calles de miles de jóvenes, como ocurrió el día 23 en Bilbao, con más de 10.000 estudiantes.

Pero junto a las grandes ciudades, las movilizaciones se dieron en cientos de pequeñas localidades, poniendo de manifiesto que la percepción de la gravedad de los ataques a la enseñanza está muy extendida. Sin duda, la convocatoria de huelga realizada por el Sindicato de Estudiantes los días 22, 23 y 24 de octubre —con la celebración de centenares de asambleas en institutos y facultades, el reparto de centenares de miles de hojas informativas y la actividad de centenares de piquetes informativos desplegados por barrios, fábricas, mercados y en el transporte público... para dar a conocer los objetivos de la lucha— ha sido decisiva para asegurar el éxito de la huelga educativa del 24.

Más motivos para seguir luchando

Los objetivos del PP con su contrarreforma franquista de la educación —LOMCE— son claros: segregar a los alumnos en función de su extracción social, expulsarnos del sistema educativo lo antes posible para que mañana seamos carne de cañón en las empresas y devolver a la Iglesia el púlpito privilegiado que tenían en el pasado para adoctrinar en las escuelas, llenándose de paso

los bolsillos. Pero este no es el único ataque. El decreto de becas, que penaliza a los que menos recursos económicos tenemos y nos exige más que al resto para poder estudiar, o la brutal subida de tasas universitarias, que ha colocado a cien mil jóvenes fuera de la universidad por no tener dinero, forman parte de este plan global.

Durante el debate de la LOMCE en el Senado, Wert también intentó imponer la oferta obligatoria de religión en bachillerato y en educación infantil! ¡Qué escándalo más grande! No tienen problema en quitar las becas de libros a más de medio millón de niños o suprimir las becas de comedor pero les resulta indispensable que con cuatro años podamos escuchar lo que la Conferencia Episcopal nos tiene que transmitir. Si finalmente estas medidas no se han materializado, ha sido única y exclusivamente gracias al enorme impacto de la huelga del 22, 23 y del 24 de octubre.

Lo mismo se puede decir sobre las becas Erasmus. El mismo 24 de octubre el ministerio aprobaba una orden, que se publicó en el BOE del 29, limitando estas ayudas que concede el Ministerio de Educación. En concreto, los miles de jóvenes que están en el extranjero acabando sus estudios y que no hubieran recibido el año anterior la beca general, iban a dejar de recibir entre 100 y 180 euros. Esta medida era aún más grave teniendo en cuenta que el curso ya ha comenzado y miles de estudiantes afectados estaban ya viviendo en el extranjero. En un contexto de absoluto descrédito y aislamiento por la amplísima contestación social a sus planes, esta nueva medida era la gota que colmaba el vaso. Alarmado por las consecuencias políticas que podía tener la orden ministerial el gobierno se ha visto obligado a rectificar en 24 horas, otro síntoma evidente de su debilidad. Se ha de-

mostrado que sí se puede frenar al PP, incluso cuando un decreto está aprobado y publicado en el BOE.

En cualquier caso los ataques continúan y no solo con el proceso de aprobación de la LOMCE. En los presupuestos para 2014 en la Comunidad de Madrid ya han previsto recortar 45 millones de euros para la universidad pública, que se traducirá en nuevos despidos de nuestros profesores y peores condiciones para los estudiantes.

Toda la comunidad educativa a la calle el 20-N

Una y otra vez nos repiten que son mayoría absoluta en el parlamento, pero lo cierto es que el Gobierno del PP es un gobierno ilegítimo que llegó al poder mintiendo y que se ha ganado a pulso el rechazo mayoritario de la sociedad. Por eso nosotros no vamos a quedarnos parados mientras utilizan sus instituciones para arrebatar los derechos más básicos a la juventud e imponernos un futuro de precariedad y paro. ¡No lo vamos a consentir!

Si todavía no han aplicado la LOMCE, si están diciendo públicamente que van a retrasar su aplicación, es porque la movilización estudiantil, del profesorado y de los padres les ha puesto contra las cuerdas. Por eso la lucha tiene que continuar, porque la lucha sirve. Por todos estos motivos desde el Sindicato de Estudiantes convocamos una nueva huelga general de estudiantes para el 20 de noviembre, coincidiendo con la fecha en la que el PP —a pesar de estar en minoría absoluta en las calles y en las aulas— pretender imponer de forma autoritaria la aprobación de la ley en el Senado.

El 20 de noviembre proponemos vaciar las clases, celebrar por la mañana movilizaciones estudiantiles en todo el estado y por la tarde manifestarnos con nuestros profesores, padres y madres, tal como ha acorda-

do la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública. Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a las organizaciones del profesorado (CCOO, UGT, STEs, CIG, CGT...) y a la CEAPA a mantener la lucha contra Wert y organizar una próxima huelga educativa de 72 horas para echar al ministro y sus recortes.

¡En defensa de la Educación Pública!
¡Wert, vete ya!
¡Juntos podemos!

Plataforma reivindicativa

- **Retirada inmediata de la LOMCE, del decreto de becas y del tasazo universitario y en la FP. Ni reválidas ni selectividad, el hijo del obrero a la universidad. ¡Wert dimisión!**
- **No a la obligatoriedad de la religión católica en la enseñanza pública.**
- **Ni un euro del presupuesto público al negocio de la enseñanza privada.**
- **En defensa de los derechos democráticos.** Respetar el derecho a estudiar y aprender en catalán, gallego y euskera, que el franquismo suprimió.
- **Por la libertad de expresión de la juventud. Nuestro derecho a huelga no se toca.**
- **Los recortes para los banqueros.** Reasignación inmediata de los 6.000 millones de euros que el PP ha recortado a la escuela pública. Readmisión inmediata de los más de 50.000 docentes despedidos este curso.
- **No a los contratos basura y a las prácticas en empresas sin remunerar.** Por un subsidio de desempleo indefinido para todos los parados hasta encontrar un puesto de trabajo.



en Internet

- ▶ **Toda la información de la convocatoria en www.sindicatodeestudiantes.net:** galerías fotográficas, vídeos, hojas y carteles, dossier de prensa, citas y convocatorias...
- ▶ **Intervención de Ana García** en la manifestación de Madrid durante la huelga educativa del 24 de octubre (vídeo): goo.gl/iu30vs.
- ▶ **Descarga en PDF la propaganda** para la huelga del 20-N en castellano, català, galego y euskera en: goo.gl/W8PP3j.

El Militante SUPLEMENTO ESPECIAL
Comente MARXISTA REVOLUCIONARIA
¡Unite a la Comente Marxista Revolucionaria!

El capitalismo arrastra a la sociedad hacia la catástrofe

organízate y lucha

De la protesta social a la lucha por el socialismo

en www.elmilitante.net

Descarga, lee, discute y difunde una alternativa revolucionaria frente a la crisis capitalista

La verdaderas causas de la crisis, el papel de la monarquía y del Estado capitalista, la crisis de la derecha y de la socialdemocracia, el auge de la protesta social, el papel de los trabajadores y de la juventud y sus organizaciones... Todos los temas de actualidad tratados a fondo en un suplemento de ocho páginas que puedes descargar en PDF en: goo.gl/e9kXUA.

El 14 de noviembre de 2012 los trabajadores del Estado español volvíamos a demostrar nuestra rotunda voluntad de alzarnos frente a la oleada de ataques del gobierno del PP. A pesar de la represión policial y de las generalizadas presiones empresariales para impedirlo, la huelga general fue un éxito total en la industria, la construcción y las principales actividades del sector servicios. Y como culminación de la jornada, las manifestaciones convocadas en las principales ciudades reunieron a millones de trabajadores.

Hoy, doce meses después, los ataques contra nuestros derechos y nuestras condiciones de vida no solo continúan sino que son aun más fuertes. Desde el Gobierno se prepara una Reforma de las Pensiones que podría recortar los ingresos de los jubilados en un 25% en los próximos diez años, y desde la patronal se lanza una sucesión de ataques a nuestras condiciones laborales, en un intento generalizado de extender la precariedad, los salarios de miseria y las jornadas de trabajo agotadoras, volviendo a las condiciones de explotación que creíamos haber dejado atrás hace décadas.

En esta situación hay un hecho que resalta de una manera clamorosa: la ausencia de una respuesta sindical adecuada a la magnitud del ataque que estamos sufriendo. Después de la huelga general del 14-N, los dos grandes sindicatos CCOO y UGT, los únicos con capacidad real para encabezar una lucha decisiva contra el gobierno del PP, se han refugiado en un silencio vergonzoso, que solo rompen ocasionalmente para realizar declaraciones inocuas.

Y por si esta pasividad fuese poco motivo para que la desconfianza en las direcciones sindicales se extienda entre los trabajadores, los últimos meses han sido pródigos en noticias sobre casos de corrupción que implican a sindicalistas. El escándalo de los EREs en Andalucía o las noticias de desviación hacia otros fines de fondos públicos destinados a la formación han sacado a la luz prácticas inaceptables en una organización obrera y han generalizado la sospecha de que tras estos casos hay una consolidada trama de irregularidades.

No es de extrañar que muchos trabajadores se pregunten cómo ha sido posible llegar a esta situación, y que expresen sus dudas sobre la utilidad de unos sindicatos que no luchan contra las políticas antisociales del PP y cuya honradez está siendo cuestionada. Los medios de comunicación de la burguesía aprovechan la confusión y cargan contra el sindicalismo en general, intentando asociarlo de forma indiscriminada a prácticas corruptas. La burguesía se frota las manos, y aprovecha la debilidad de los dirigentes sindicales para apostar abiertamente por la desarticulación del sindicalismo de clase.

El papel histórico de los sindicatos

Desde que en las primeras décadas del siglo XIX los trabajadores de los primeros núcleos industriales tomaron conciencia de su situación y decidieron organizarse para defender sus derechos, los sindicatos han sido un arma fundamental del movimiento obrero en todo el mundo. Avances como la prohibición del trabajo infantil, la jornada de 8 horas o la extensión de derechos sociales en la gran mayoría de los países capitalistas desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, fueron conquistas fundamentales del movimiento obrero organizado.

Los sindicatos fueron el primer medio por el que los trabajadores se unieron frente a los abusos de los patronos, y poco a poco, a partir de la experiencia de las luchas cotidianas, la organización sindical centrada en acciones reivindicativas propias de un oficio o sector abrió paso a una organización general de los trabajadores como clase que, sin renunciar a luchar por mejoras inmediatas, inscribió en sus banderas el objetivo de acabar con la explotación capitalista.

Precisamente porque la acción sindical es un primer paso hacia la acción política del proletariado, cuando en los años 30 la burguesía española recurrió al fascismo para aplastar el empuje revolucionario de la clase obrera, su primer objetivo fue erradicar a

sangre y fuego las organizaciones sindicales y durante las casi cuatro décadas de la dictadura de Franco la actividad sindical fue duramente reprimida.

Una cruel represión que no pudo evitar que los trabajadores se organizaran en la clandestinidad, fundamentalmente en las Comisiones Obreras, y, a través de sucesivas oleadas de huelgas y manifestaciones, acabasen minando el régimen franquista. Bajo el empuje del movimiento obrero organizado, el franquismo tuvo que ir cediendo y los trabajadores fuimos conquistando el reconocimiento de algunos derechos básicos. Así, en 1958 se conquistó la primera Ley de Convenios Colectivos, en 1961 el Seguro de Desempleo, o en 1963 la aprobación de un Salario Mínimo.

Cada ola de huelgas socavaba los cimientos de la dictadura y finalmente la fuerza del movimiento obrero hizo imposible cualquier intento de darle continuidad. La conquista de las libertades políticas en 1977 no detuvo la movilización, y los trabajadores continuamos luchando por recuperar y ampliar nuestros derechos. Si hoy puede hablarse en el Estado español de “estado del bienestar” es gracias a que la lucha de los trabajadores en los últimos años de la dictadura desbordó ampliamente los márgenes del sistema capitalista y adquirió las características de una lucha revolucionaria. Y fue precisamente el terror de la burguesía a perder para siempre sus privilegios lo que la forzó a realizar importantes concesiones y a admitir avances sociales que unos años antes parecían impensables.

Esos avances en materia laboral, en pensiones, vivienda, sanidad o educación, son ahora el objetivo de las contrarreformas del gobierno del PP, apoyadas y secundadas por la CEOE y el resto de organizaciones patronales. Pero este ataque de la burguesía no podría realizarse con la facilidad con la que se realiza si no fuese por la política pactista de los dirigentes de CCOO y UGT.

La evolución de las direcciones sindicales

Es en estos momentos cuando más escandalosamente destaca la escisión entre lo que defienden Toxo y Méndez y lo que realmente necesitamos y demandamos los trabajadores. Las raíces de esta política se hunden en los tiempos de la Transición, cuando los dirigentes obreros reformistas consiguieron frenar el potencial revolucionario de la clase obrera del Estado español y estabilizar el sistema capitalista, considerado por ellos —en palabras de un ministro de Felipe González— el “horizonte insuperable de nuestro tiempo”.

Renunciando a plantear una alternativa al capitalismo y circunscribiendo su acción política y sindical a los avances que puedan conseguirse a través del pacto social, intentando limitar la movilización a un mecanismo de presión utilizado solo para agilizar el diálogo con la patronal, los dirigentes reformistas se ataron voluntariamente de pies y manos frente a la burguesía. Mientras el

Crisis del capitalismo y CCOO y UGT en una e

¡Hay que abandonar el p sindicalismo de clase, co



capitalismo experimentó una fase de expansión no faltaron medios para realizar algunas concesiones que facilitarían la paz social y los dirigentes sindicales se ufanan de lo que consideraban logros de su habilidad negociadora y del reconocimiento por parte de la burguesía de su relevancia como “interlocutores sociales” que aseguraban con su moderación la buena marcha de la economía.

Pero la política de pacto social tenía un precio. Durante los años 80 se inició una oleada de reconversiones industriales que dejó a miles de trabajadores en la calle y a varias comarcas completamente desmanteladas. A pesar de la enorme resistencia desplegada por los trabajadores, a pesar de la dureza de las huelgas y movilizaciones, los dirigentes sindicales rechazaron la unificación de las luchas de todos los sectores con un programa de inversiones industriales masivas financiado a través de la nacionalización de la banca y el sector financiero. Solo así se podría haber frenado la masiva sangría de empleo, pero los dirigentes sindicales, temerosos de sobrepasar los límites impuestos por el sistema capitalista, se negaron a dar ese paso y acabaron firmando unos acuerdos de reconversión industrial que condenaron al paro a miles de trabajadores.

A partir de ese momento, la comprensión mostrada por los dirigentes sindicales con las empresas y sectores que planteaban despidos o recorte de derechos se generalizó y la teoría del “mal menor” se convirtió en doctrina oficial de los dos grandes sindicatos. Ya no se trataba de defender sin concesiones los puestos de trabajos amenazados o los convenios colectivos puestos en cuestión. Aceptar que el sistema capitalista es el único posible llevaba aparejado aceptar su lógica: si hay pérdidas, habrá que despedir trabajadores o habrá que renunciar a conquistas conseguidas años atrás. Este giro a la derecha se notó especialmente en las Comisiones Obreras durante el mandato de José María Fidalgo, que provocó una ola de malestar interno a causa de sus concesiones ilimitadas a la patronal y al gobierno.

Finalmente en el IX Congreso de CCOO, en 2008, Fidalgo fue derrotado por el actual secretario general Ignacio Fernández Toxo. Pero la ilusión en que la derrota de Fidalgo abriría una nueva etapa en CCOO duró poco. Pronto se comprobó que, a pesar de un cierto cambio en el lenguaje, el pacto social y el diálogo con la patronal y el gobierno continuaban siendo los ejes estratégicos de la política del sindicato.

Los dirigentes sindicales ante la crisis

La crisis general del capitalismo que se inició en 2007 ha dejado completamente al desnudo la inutilidad de la política sindical reformista para contener o paliar los ataques a los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. La crisis capitalista limita y dificulta la valorización del capital y por ello las empresas se lanzan a una carrera de incremento de beneficios a toda costa, y por el camino van quedando el empleo digno, los servicios públicos gratuitos y de calidad, y una gran mayoría de las conquistas sociales realizadas por la clase obrera a lo largo de décadas.

Pero también queda por el camino el diálogo social al que se aferran los sindicatos como a un clavo ardiendo. Los capitalistas ya no están en disposición de realizar concesiones, puesto que la crisis de su sistema les obliga a exprimir cada vez más a la fuerza de trabajo, de modo que los acuerdos a largo plazo con los sindicatos dejan de serles útiles. La incompreensión de esta realidad es el fundamento de las políticas defendidas por las direcciones sindicales. En su informe al Consejo Confederal del 15 y 16 de octubre, los dirigentes de CCOO insisten en que, a pesar de estar sujetos a las condiciones impuestas a raíz del rescate del sistema financiero “No por ello el consenso es hoy menos necesario. Antes al contrario, ahora es cuando el Diálogo Social podría mostrar todo su potencial pero para ello sería necesaria, como venimos demandando, una profunda reorientación de las políticas europeas y españolas”.

crisis del sindicalismo

Encrucijada histórica

Acto social y volver a un sindicalismo combativo y democrático!



Lo que demanda la cúpula de CCOO es un imposible retorno al capitalismo de los años 60, un capitalismo con amplia intervención estatal y que, sometido a la doble presión de unos fuertes sindicatos en el interior y en el exterior, donde los avances derivados de la economía planificada en el bloque de países encabezados por la Unión Soviética (a pesar de la tremenda aberración de la burocracia estalinista), empujaban a la burguesía occidental a realizar concesiones para mantener el equilibrio social. Pero ese capitalismo es hoy impensable. Por eso la esperanza de que un “profundo giro” de las políticas de la Unión Europea reestablezca la prosperidad perdida es totalmente vana.

La carencia de una alternativa al capitalismo ha conducido al sindicalismo reformista a un endiablado dilema: o se adaptan a las necesidades reales del capitalismo, lo que significa hacerse corresponsables de la única política económica posible en ese sistema, o se ven sumidos en la más completa pasividad. Hace 73 años, Trotsky escribía que los sindicatos “deben enfrentar un adversario capitalista centralizado, íntimamente ligado al poder estatal. De ahí la necesidad que tienen los sindicatos —mientras se mantengan en una posición reformista, o sea de adaptación a la propiedad privada— de adaptarse al Estado capitalista y de luchar por su cooperación. A los ojos de la burocracia sindical, la tarea principal es la de ‘liberar’ al Estado de sus ataduras capitalistas, de debilitar su dependencia de los monopolios y volcarlos a su favor” (León Trotsky, *Los sindicatos en la era imperialista*).

Pero la “pasividad” de los dirigentes sindicales no es neutra. Tiene una grave consecuencia, y es que da aliento a la burguesía para profundizar y acelerar su ofensiva. Cada ataque que no es respondido de una manera firme es un estímulo para que empresarios y gobierno planteen un ataque aun mayor. La reforma de las pensiones de 2011, pactada con CCOO y UGT, allanó el camino a la propuesta de contrarreforma actual. Después de la huelga general del 29 de

marzo y la del 14 de noviembre, impuestas desde abajo por el movimiento, los dirigentes de CCOO y UGT retomaron con fuerza el camino de la negociación con el gobierno y suspendieron *sine die* la continuidad de la movilización general. El efecto fue claro: las disposiciones más negativas de la contrarreforma laboral, como las que tienen que ver con la posibilidad de recurso judicial frente a un ERE o con las facilidades concedidas a multinacionales para realizar despidos, se empeoraron aún más el pasado mes de agosto; lo mismo con la reforma de las pensiones, o con la ley Wert, o con los ataques a la dependencia...

¿Hay o no ambiente de lucha?

Ante las protestas de sus afiliados, los dirigentes sindicales descargan la responsabilidad de su inacción sobre los propios trabajadores. Explican que los trabajadores aceptamos los recortes que se nos imponen y no mostramos la menor disposición a la lucha. El éxito de huelgas y manifestaciones se minimiza, en un patético intento de justificar la injustificable política de consenso y pacto.

Pero ¿hay algo de cierto en esa supuesta pasividad social? Para cualquier observador sin prejuicios es evidente que no. Todas las convocatorias de huelga general han tenido un extraordinario seguimiento, al igual que la inmensa mayoría de las luchas de ámbito sectorial. Es más, muchas de las movilizaciones sectoriales han tenido un amplísimo apoyo social, como pudimos ver con la reciente huelga general de la Enseñanza, o con las luchas de la minería y la marcha minera a Madrid, que despertó en los barrios obreros de la ciudad un entusiasmo desbordante, que culminó con la Puerta del Sol llena de manifestantes a la una de la madrugada de un día laborable. Por no hablar del gigantesco apoyo recibido por los profesores de las Islas Baleares después de declararse en huelga indefinida.

No solo es falso que no haya ambiente de lucha, sino que la pasividad de los sindicatos ha propiciado que la indignación so-

cial se exprese por otras vías. ¿Cómo entender si no el surgimiento del 15-M y el mantenimiento durante meses de su enorme capacidad de convocatoria? Fue precisamente al empuje del 15-M y su insistencia en la recuperación de los métodos asamblearios lo que ayudó a constituir esa nueva forma de movilización que son las Mareas —Verde de Educación, Blanca de Sanidad, Naranja de Servicios Sociales...— en la que los trabajadores de un sector confluyen con usuarios, vecinos y con el resto de la clase trabajadora.

Si alguna conclusión puede sacarse de las masivas movilizaciones que estamos viendo es que los dirigentes sindicales van muy por detrás de la clase trabajadora y de sus propios afiliados. El atraso de los dirigentes sindicales y su desconexión de la realidad se comprueban, como no podía ser de otro modo, en el interior de sus propios sindicatos. En las últimas semanas, trabajadores de diversas empresas han tenido que desautorizar a sus dirigentes sindicales y echar abajo acuerdos gravemente lesivos firmados con la patronal. Desde el astillero de Navantia en Ferrol (donde el Sector Crítico de CCOO está dirigido por los marxistas de EL MILITANTE) hasta la factoría de Panrico en Santa Perpetua, pasando por el Metro Ligerero Oeste de Madrid o RTVE, las asambleas de trabajadores han echado abajo convenios prefirmados y acuerdos con las empresas, y han exigido movilización y lucha. Y estos casos son solo el principio de una ola de rebeldía de las bases sindicales frente a sus dirigentes. Es inevitable que los trabajadores de empresas sujetas a los más fuertes ataques patronales —un cierre definitivo, despidos masivos, recortes salariales salvajes— decidan no rendirse sin lucha, y para ello intentarán utilizar todos los medios a su alcance, incluyendo el sindicato. Y si los dirigentes sindicales se cruzan en su camino, no hay duda de que serán arrollados. Esta es la realidad ante la que los dirigentes sindicales cierran voluntariamente sus ojos.

¿Cuál es la alternativa sindical que necesitamos?

Ante la perspectiva de que el capitalismo, tanto en el Estado español como en el resto del mundo, va a continuar basando sus beneficios en un incremento desmesurado de la explotación de los trabajadores, no cabe ya otra política sindical que la que cuestiona el sistema capitalista y une las reivindicaciones básicas e inmediatas al logro de objetivos socialistas. Para resistir con éxito las peores agresiones de la burguesía no hay otra alternativa que romper con la aceptación de la propiedad privada como techo de nuestras reivindicaciones, y por eso solo dotando a los sindicatos de una política de transformación revolucionaria de la sociedad capitalista será posible que nuestras movilizaciones consoliden victorias.

Con esa política, las dos centrales mayoritarias, que hoy muchos trabajadores ven como un obstáculo, volverían a ser el instrumento de unión y lucha para el que fueron creados. En la construcción de CCOO y UGT están enterrados los esfuerzos y los sacrificios de cientos de miles de trabajadores honestos y combativos, que dedicaron gran parte de sus vidas a construir lo que tendría que ser la primera trinchera de la resistencia obrera a la explotación capitalista. El hecho de que esos sindicatos estén hoy en manos de los actuales dirigentes no resta valor a su enorme potencial como herramienta de lucha.

La experiencia nos enseña que construir un sindicato al margen de las grandes centrales sindicales no es tarea fácil, y que incluso, si se consiguiese, no existen garantías absolutas de que no sufrirá desviaciones reformistas. La única garantía de que un

sindicato se mantiene fiel a sus objetivos fundacionales es su defensa de un programa revolucionario de transformación socialista de la sociedad y el respeto a los métodos de la democracia obrera. Un sindicato que no se constriñe a los límites impuestos por el capitalismo, un sindicato que no firma acuerdos a espaldas de sus bases, es un sindicato que puede respetar a las asambleas de trabajadores como máximo órgano de decisión, y que puede llevar la voluntad de lucha de sus bases hasta sus últimas consecuencias.

Quienes se planteen abandonar sin lucha los dos grandes sindicatos no debilitan a las direcciones reformistas, aunque esa sea su intención. Más bien ocurre lo contrario, ya que el debilitamiento de las bases coadyuva a dar un balón de oxígeno a los actuales dirigentes.

Por supuesto, un sindicato orientado a la lucha por el socialismo no necesita ni acepta otros métodos de financiación que no sean las aportaciones de sus afiliados y del propio movimiento obrero. Los casos de implicación sindical en asuntos turbios, esos casos que la prensa de derechas amplifica en un intento de desmoralizar a los trabajadores y hacerlos presa fácil de la explotación, han sido posibles porque las direcciones de UGT y CCOO se separaron de los principios organizativos y financieros que deben caracterizar a un sindicato obrero. Un sindicato de clase, armado de una política socialista, ni quiere ni necesita financiación desde el Estado burgués, ni acepta que una pequeña capa de dirigentes disfrute de unas condiciones de vida ajenas a la inmensa mayoría de los trabajadores y más cercanas a la de sectores privilegiados de la pequeña burguesía.

El ejemplo de la Caja de Resistencia de los profesores de Baleares, que consiguieron en unos días más de 400.000 euros para mantener su huelga indefinida, es prueba más que suficiente de que un sindicato combativo puede autofinanciarse y no comprometer su independencia con el Estado o la banca.

Pero ¿es posible que esa política sindical combativa y revolucionaria reconquiste las dos grandes centrales sindicales? La respuesta de los marxistas es Sí. La condición es que reforcemos la construcción de una corriente sindical de izquierdas en el seno de CCOO y UGT, una corriente capaz de unir a esa inmensa mayoría de sindicalistas disconformes con la política pactista, que exponga abiertamente sus posiciones y que intervenga directamente en las luchas sindicales con su programa de combate y sus métodos de democracia obrera.

La tarea más inmediata es exigir, frente a la nueva oleada de ataques del gobierno (reforma de las pensiones, ley Wert, recortes presupuestarios cuantificados en 17.500 millones de euros en los próximos dos años, incremento de la presión con la reforma del Código Penal, etc.), la convocatoria inmediata de una nueva huelga general; una huelga que sea parte de una estrategia de lucha ascendente en la que la participación por abajo sea el motor fundamental y cuyo objetivo debe ser la dimisión del gobierno del PP, la convocatoria de elecciones anticipadas y la formación de un gobierno auténticamente de izquierdas que revierta todas las medidas impuestas por la derecha en los últimos dos años.

¡Hay que tumbar al gobierno de los banqueros y empresarios con la lucha!
¡Los dirigentes de CCOO y UGT tienen que abandonar ya su parálisis y convocar una huelga general!
¡Únete a la Corriente Marxista EL MILITANTE y lucha con nosotros por un sindicalismo de clase, democrático y combativo!
¡Por la transformación socialista de la sociedad!



¡No al cierre de Johnson Controls Interiores! (Valencia)

Joan García • Sindicat d'Estudiants

Johnson Controls es una empresa auxiliar de la multinacional Ford, situada en el parque de proveedores Juan Carlos I de Almussafes, al sur de Valencia. Ford ha aprobado en todas sus factorías la construcción propia de una serie de productos que hasta ahora corrían a cargo de proveedores, en concreto en Almussafes el montaje del salpicadero de los vehículos, afectando así a una gran parte de la producción que tiene Johnson Controls Interiores (JCI), y que Ford había acordado con ella hasta 2018. Los trabajadores tienen miedo de que pase lo mismo con sus otros productos (asientos). Mientras la empresa transmite a los trabajadores que están en negociaciones y que no hay ningún problema, la realidad es realmente preocupante.

Johnson Controls no ha recibido ninguna pieza nueva, ni conseguido la concesión para realizar suministros de los nuevos modelos (Mondeo, Galaxy y el S-Max) que está previsto que lance Ford entre 2014 y 2015. El comité de empresa denunció a principios de octubre la "incertidumbre" que se cierne sobre ellos y que utilizarían las movilizaciones "para evitar la posible desaparición de la empresa".

Las consecuencias serían catastróficas. De los 600 trabajadores (el 50% eventuales) de JCI tan solo 200, los encargados de tareas de montaje final de componentes, tendrán "suerte" porque, parece, podrían ser contratados por la Ford tras sus obras de ampliación. Eso sí, sin saber sus nuevas condiciones de trabajo (que todos nos podemos imaginar). De nuevo ataque tras ataque, los mismos contra los mismos, empresarios contra la clase obrera. Ford ya ha eliminado a Visteon, que se encargaba de la misma función que Johnson Controls, en otras plantas del mundo. Bajo este sistema la competencia feroz entre los capitalistas por mantener sus beneficios lleva a que el pez grande se coma al chico, mientras miles y miles de puestos de trabajo se quedan en la cuneta.

El martes 29 de octubre el comité de empresa de JCI convocó una concentración de trabajadores en la puerta de la fábrica, apoyada por los sindicatos CGT y UGT. En ella estuvimos presentes compañeros de Sindicat d'Estudiants para solidarizarnos con ellos. Somos conscientes de que la lucha contra el cierre de empresas es la lucha por nuestro futuro. El comité de empresa se está oponiendo rotundamente a las decisiones de la empresa y plantea la necesidad de seguir la lucha, con movilizaciones y la convocatoria de huelga que debería tener un objetivo claro: la defensa de todos los puestos de trabajo. ¡Este es el camino!

Seis mineros muertos en León ¡Que se depuren todas las responsabilidades!

El 28 de octubre seis mineros perdían la vida y otros cinco resultaban heridos en el Pozo Emilio del Valle, en la localidad leonesa de Pola de Gordón, al producirse un escape masivo de grisú. Este es el accidente más grave que se produce en la minería desde que en 1995 catorce mineros murieran en el pozo Nicolasa, por una explosión de grisú. Las federacio-

nes mineras convocaron dos días de huelga en toda la minería estatal en señal de duelo y el martes 29 las muestras de solidaridad se sucedieron por todo el estado, desde los trabajadores de Encasur en Puertollano (Ciudad Real) hasta el paro total de los 3.000 trabajadores de la minería asturiana en Hunosa, Carbonar, Uminsa y Coto Minero Cantábrico.

Mónica Iglesias

Los trabajadores fallecidos, aunque jóvenes, eran experimentados mineros, con años de trabajo a sus espaldas. Alguno con un hijo de pocos días, otro a falta de unos meses para poder prejubilarse, todos con familia, amigos y compañeros que asisten impotentes a otro nuevo accidente minero. "Ya me tocó vivir la tragedia de Nicolasa, en la que perdieron la vida 14 compañeros. Y ahora esto. Es como volver atrás", se lamentaba un trabajador. "No se puede explicar lo duro que es tener que afrontar que tus amigos, tus vecinos, de repente ya no están".

El accidente ha reabierto las heridas todavía frescas de las últimas luchas mineras, y muchos recuerdan con rabia lo que han tenido que pasar por defender el futuro de la mina y cómo, desde el gobierno y también desde la patronal, se les llamaba "privilegiados" o cómo se les intentó enfrentar con el resto de trabajadores con el bulo de unos "desorbitados" salarios. "La gente está muy confundida, los sueldos ya no son lo que eran. Hoy en día un ayudante de minero cobra 900 euros, y se juega la vida como los demás", recalca desde la sala de espera de la UCI un vecino de Juan Manuel Menéndez, el único trabajador herido que continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario de León.

Los familiares denuncian los recortes en seguridad

La reacción de la comunidad minera ha sido, como no podía ser de otro modo, de inmenso dolor ante la magnitud de la tragedia, pero también de rabia ante un accidente que está directamente relacionado con los recortes al sector, lo que ha tenido como consecuencia una rebaja de la seguridad en el trabajo. Aunque La Hullera Vasco Leonesa, a quien pertenece la explotación, lo niega, la versión de José Manuel González, hermano de uno de los falleci-



dos es muy distinta: "Hay recortes, claro que hay recortes en la seguridad (...) tras la huelga del verano, se cargaron a gente de la brigada de salvamento, se cargaron a dos ingenieros dedicados a la seguridad de la mina... los echaron".

El responsable del sector minero de Figtag-UGT en Castilla y León y secretario de comité de empresa de La Hullera Vasco-Leonesa, José Antonio Colinas, reconocía que ese macizo siempre tuvo un comportamiento distinto a los otros dos y que ya se habían registrado varios incidentes en los últimos años que hacían temer a los trabajadores que se pudiera producir un escape de grisú o un derrame, es decir, el derrumbe de la galería.

Se da la circunstancia, además, de que hace unos meses ya hubo un accidente en ese mismo punto que se saldó con tres heridos. Colinas ha insistido en la necesidad de cerrar esa parte de la explotación "para siempre". "Los trabajadores no tienen ánimos para volver a esta zona, que es problemática".

Hipocresía de la derecha

De hecho, en el multitudinario funeral que tuvo lugar el miércoles 30, muchos hablaban de que esta era una tragedia anunciada, y a petición de los familiares se vetó la

presencia de las autoridades, entre ellas el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), al que los mineros acusaban de estar allí para "hacerse la foto". De la misma manera, los mineros obligaron al ministro de Industria, José Manuel Soria, a abandonar el hospital donde estaban ingresados los heridos. "Le hemos echado, le hemos dicho que ni se le ocurriera aparecer por aquí, no sé cómo tiene la vergüenza de aparecer después de lo que nos ha maltratado".

Durante estos días, todos (empresa, gobierno y demás instituciones) se han cuidado mucho de hacer algún tipo de declaración que pudiera encender los ánimos. Al contrario, ahora todo son elogios para la dura labor de estos trabajadores. Pero de la misma manera que los trabajadores del pozo Emilio del Valle se van reincorporando al tajo, a arriesgar nuevamente sus vidas, con el dolor aún a flor de piel de estas últimas pérdidas, estamos seguros de que no tardarán en arreciar de nuevo los ataques al futuro de la mina y a las condiciones laborales de sus trabajadores por parte de estos mismos que ahora vierten lágrimas de cocodrilo y se lamentan hipócritamente de la situación en la que han quedado las viudas y los huérfanos, las madres y hermanos de la última tragedia minera.

Aplazado al 2 de diciembre el juicio por el despido de la sindicalista Ivonne García de CC00

Sección sindical de CC00 en Europastry Oficinas

La huelga indefinida de los trabajadores de justicia en Catalunya ha obligado a aplazar el juicio, previsto para el 25 de noviembre, por el despido de la sindicalista de CC00 Ivonne García, delegada en Europastry. Una treintena de sindicalistas acompañaron a la compañera en los juzgados de Terrassa participando en una concentración de solidaridad para exigir la anulación del despido, un claro acto de persecución sindical por parte de la empresa. Hasta la fecha se han recibido casi 400 resoluciones de apoyo, incluyendo las del secretario general de CC00 de Catalunya, Joan Carles Gallego Herrera; de la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García; de la Federación Agroalimentaria de CC00 de Catalunya; de EUiA de Terrassa y de muchos otros

¡Todos a Terrassa para exigir su readmisión! ¡No a la represión sindical en Europastry!



sindicalistas y entidades de la izquierda de Catalunya y de todo el estado.

El juicio se celebrará el 2 de diciembre a las 9:15 horas, en el Juzgado de lo Social nº1, Rambleta Pare Alegre nº 112

(Terrassa), donde también está convocada una nueva concentración de protesta. ¡Acude! ¡Que no pisoteen tus derechos!

Toda la información en europastryrepresio.blogspot.com.es

Ulises Benito

Los acontecimientos se precipitan desde que el martes 5, cumpliendo los pronósticos, el Tribunal Superior de Justicia valenciano declarara nulo el ERE de despido de dos tercios de la plantilla de Ràdio-Televisió Valenciana (RTVV). Alberto Fabra, presidente de la Generalitat por el PP, anunció ese mismo día el cierre “rápido, innegociable” de la radiotelevisión. Y también ese mismo día los trabajadores, en asamblea, decidieron irrumpir en el telediario nocturno para difundir un comunicado. Desde ese momento ellos tienen el control de RTVV, decidiendo qué se emite y qué no, realizando programas especiales contra el cierre y rompiendo con décadas de manipulación política extrema. Las concentraciones se suceden y el Comité de Empresa ha hecho un llamamiento a solidarizarse con ellos en las manifestaciones del sábado 9.

Son numerosas las razones jurídicas que ha llevado al tribunal a anular el ERE: la falta de criterios objetivos a la hora de decidir quién aparecía en la lista de despedidos (muchos directivos y *enchufados* fueron salvados discrecionalmente), la ausencia de una negociación real con el Comité, la ocultación al mismo de información...

La demagogia de Fabra y del PP

El ERE masivo de 2012 (952 despidos) puso en peligro incluso la continuidad técnica de RTVV (Canal 9 y Ràdio 9), hasta el punto de que la nueva directora general (Rosa Vidal) tuvo que repescar de entre los despedidos (con la oposición de la Generalitat) a varios técnicos, para evitar el *fundido a negro*. Ahora la decisión del cierre es justificada porque el Consell no puede pagar los 72 millones de masa salarial correspondiente a 1.700 empleados. Es más, con toda desfachatez Fabra dice que el cierre permite salvaguardar la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos, “es mejor cerrar RTVV que un colegio o un hospital”. Es un auténtico sarcasmo para los cientos de miles de padres, profesores y estudiantes que se han manifestado una y otra vez (la última, el 24 de octubre) contra los recortes educativos, contra los barra-

¡Nou no se cierra! ¡Por una huelga general para tumbar a Fabra!

Los trabajadores se rebelan y toman la radiotelevisión valenciana



cones, contra la eliminación de las becas de libros... Y para los millones de usuarios de la sanidad pública que también sufren los continuos recortes. Quienes no tienen quejas son los banqueros y emprendedores, que este año al poner el cazo recaudan de la Generalitat ¡4.200 millones!, en concepto de deuda pública.

“Els treballadors no som els culpables” es una consigna que desde el año pasado está presente en las calles valencianas. Y tienen razón. Son los directivos, los responsables del ente, y los políticos del PP. Cuando llegaron a la Generalitat RTVV tenía una deuda de 51 millones; en 2011 era ¡de 1.300 millones! Esos 72 millones que dicen que quieren ahorrar contrastan, por ejemplo, con los 540 millones que, de forma encubierta, la radiotelevisión ha regalado a tres clubes de fútbol valencianos con problemas contables (por el método de la sobrevaloración de derechos de emisión). O con los cientos de millones que han salido de sus presupuestos para productoras privadas (muchas de ellas propiedad de directivos del ente o allegados al PP), en un proceso extremo de externalización. La enorme deuda no ha redundado en la mejora de la calidad, y así lo perciben los valencianos: el *share* ha pasado del

22,5% en 1992 al 3,8% este año (antes de la toma de control por parte de los trabajadores, que lo ha triplicado).

Los trabajadores toman el control

En pocas horas, y gracias a los trabajadores, Nou (antigua Canal 9) se ha transformado. Han tomado la dirección, controlando todo el proceso de la emisión. “Moriremos con las botas puestas”, dice un trabajador... Toda la rabia acumulada durante tantos años de censura, de manipulación, de acoso laboral, ha explotado. Los locutores exigen la dimisión de Fabra y denuncian la continua utilización de la radiotelevisión por parte del PP (prácticamente escondió el escándalo de los trajes de Camps, el accidente de metro..., llegando al absurdo, en época de Aznar, de prohibir la utilización de la palabra *botella* en los concursos, o del término *País de Nunca Jamás* de Peter Pan por su similitud con el *Nunca Más* del *Prestige*). Por primera vez, hay auténticos debates políticos y la oposición —prácticamente vetada antes— tiene acceso al plató.

El PP tiene un gran problema. Ni la plantilla ni los trabajadores valencianos van a permitir tan fácilmente el cierre. La consigna

“Nou no es tanca” (Nou no se cierra) se cuele en cada casa gracias a su sobreimpresión continua en la pantalla. Y legalmente el cierre no puede ser automático (Fabra calcula que será en enero, los sindicatos avisan de que realmente no es posible antes de mayo). Mientras tanto, los trabajadores han ocupado de hecho las instalaciones, emitiendo reportajes sobre los chanchullos del PP, llamando a la movilización, y dando la voz a la calle. ¿Cuánto tiempo puede el PP permitir esa situación? Pero si en un momento dado decide cortar la señal (aunque la plantilla hace guardia para impedirlo), o incluso llevar a la policía a desalojar, puede provocar al movimiento y jugarse incluso su continuidad en la Generalitat.

¡Es el momento de la lucha! De organizar al máximo el control obrero de RTVV. Pero sólo resistir en las instalaciones y en cada pequeña pantalla no es suficiente. La convocatoria de la manifestación el sábado 9 de noviembre es un paso adelante importantísimo para implicar al resto de la población, que sin duda se volcará. Pero hace falta más. Hace falta que los sindicatos de clase se pongan a la altura de las circunstancias, unificando todas las luchas y convocando una huelga general en todo el País Valenciano (y en todas las radiotelevisiónes públicas) para echar abajo este grave ataque.

¡Una radiotelevisión pública, democrática, de calidad y en valenciano, es posible, bajo control de los trabajadores!

¡Por la defensa de todos los servicios públicos, retirada de todos los recortes! ¡Ni un solo despido!

¡Dimisión inmediata de Fabra y elecciones anticipadas para garantizar una Generalitat de izquierdas con un programa auténticamente de izquierdas! ¡Sí se puede!

El Sindicato de Estudiantes se une a la querrela argentina por los estudiantes asesinados en la dictadura

El 8 de noviembre el Sindicato de Estudiantes presentó una querrela por los estudiantes asesinados por fuerzas del Estado y grupos de ultraderecha entre 1969 y 1977, uniéndose así a la causa argentina que investiga los crímenes del franquismo en colaboración con el trabajo ya iniciado desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querrela.

Ana García, secretaria general del SE, explicaba durante las pasadas movilizaciones estudiantiles: “nos sentimos herederos de todos los que lucharon contra la dictadura y por una Educación Pública, laica y de calidad. Si hoy podemos salir a la calle a defender unos derechos conquistados como la Educación y la Sanidad es precisamente gracias a todos los que lucharon y defendieron un modelo de sociedad diferente”.

Miembros de la Coordinadora Estatal, con la que el SE mantiene una estrecha relación de apoyo y colaboración, se dirigieron a los asistentes a la multitudinaria manifestación de estudiantes en Madrid del 23 de octubre (en el segundo día de huelga estudiantil estatal contra la LOMCE), causando verdadero entusiasmo entre las decenas de

¡Hoy, como ayer, la lucha es el único camino!

miles de asistentes. Chato Galante, miembro de la Coordinadora, insistió: “El movimiento estudiantil fue un pilar clave para la lucha contra el franquismo. Luchábamos por lo mismo que vosotros y, probablemente, contra la misma gente. Hemos tenido que ir a Argentina para denunciar a la gente que nos detuvo y nos torturó. Luchábamos, como vosotros, por un país más justo”.

Es por estos motivos que, a través de la presentación de esta querrela, el Sindicato de Estudiantes pedirá que se investiguen las responsabilidades por los asesinatos de:

Enrique Ruano Casanova. Estudiante universitario de 21 años, miembro del Frente de Liberación Popular. Murió el 20 de enero de 1969 por caída desde la ventana de un edificio al que había sido llevado por la Brigada Político Social.

José Luis Sánchez-Bravo Solla. Estudiante universitario de 21 años, juzgado en Consejo de Guerra junto con otros cinco militantes del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) por el asesinato de un Guardia Civil. Todos negaron su participación en este atentado, pero reconocie-

ron su militancia antifascista. El 27 de septiembre de 1975 fue fusilado.

Francisco Javier Verdejo Lucas. Estudiante de Biología en la Universidad de Granada y militante de la Joven Guardia Roja (JGRE). Asesinado en la madrugada del 13 de agosto de 1976, a los 19 años, por la Guardia Civil mientras realizaba una pintura. Su intención era pintar “Pan, Trabajo y Libertad” pero sólo pudo pintar “Pan, T”.

Carlos González Martínez. Estudiante de Psicología de 21 años, asesinado por un grupo ultraderechista durante una manifestación con motivo del primer aniversario de los cinco últimos fusilamientos de Franco, el 27 de septiembre de 1976. El crimen sigue impune.

Juan Manuel Iglesias. Estudiante de 15 años, muere el 9 de enero de 1977 cuando huía de una carga policial tras una manifestación proamnistía en Sestao.

Arturo Ruiz García. Estudiante de 19 años. También trabajaba esporádicamente en la construcción, afiliado a Comisiones Obreras. Fue asesinado por miembros de la ultraderechista Triple A, cuando participa-

ba en una manifestación proamnistía. A pesar de haber sido identificado su asesino (José Ignacio Fernández Guaza, que huyó a Francia tras el asesinato) y un cómplice involucrado (Jorge Cesarsky Goldenstein) el asesinato sigue impune.

María Luz Nájera Julián. Estudiante de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, de 20 años. Fue asesinada el 24 de enero de 1977 por un bote de humo disparado por la policía desde corta distancia cuando participaba en una manifestación en protesta por la muerte de Arturo Ruiz.

Serafín Holgado de Antonio. Estudiante de Derecho en la Universidad de Salamanca, militante del PCE. Fue uno de los asesinados por un grupo fascista en el Despacho de Abogados comunistas de la Calle Atocha, donde hacía sus prácticas, el 24 de enero de 1977.

José Luis Aristizábal Lasa. Estudiante de 20 años. Durante una manifestación proamnistía en San Sebastián, esperaba dentro de su coche y fue alcanzado por una pelota de goma disparada por la policía. Su asesinato sigue impune.

Huelga indefinida en Panrico (Barcelona)

¡Hay que extenderla a todas las factorías del estado!

Lluís Perarnau

El lunes 14 de octubre se inició la huelga indefinida en la planta de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), con un seguimiento del 100%. Por la mañana, ante el piquete pacífico de 200 trabajadores en la puerta de la fábrica, la policía autonómica cargó sin previo aviso y sin motivo, un ejemplo más del papel de hostigamiento y provocación con que el gobierno de CiU utiliza a los Mossos. Las imágenes que han circulado por las redes hablan por sí solas.

Plan salvaje de despidos y reducción salarial

La situación de Panrico, 4.000 trabajadores y con fábrica en Valladolid, Madrid, Puente Genil y Zaragoza, además de en Santa Perpètua, ha ido de mal en peor. Primero, la familia Costafreda se la vendió por un buen picotazo a un fondo de capital riesgo, Apax, y desde junio, el único accionista de Panrico es otro fondo de capital riesgo, Oaktree, de EEUU, que ha puesto a la cabeza de la dirección a Carlos Gila, un "experto en reestructuraciones", un superdirectivo con superretribuciones y con un historial en empresas como la Seda y Azucarera Ebro.

Esta dirección es la que presentó un ERE por el cual pretende deshacerse de la mitad de la plantilla (1.914 despidos) y rebajar los sueldos entre un 35% y un 45% de media a los asalariados y un 20% a los autónomos. Y en esta guerra de nervios con que la dirección de Panrico quiere apabullar a los trabajadores, ante el anuncio de huelga, la empresa presentó precurso de acreedores. Los trabajadores han dejado de cobrar la nómina de septiembre, y el preacuerdo alcanzado el jueves 10 de octubre por el comité intercentros, por el cual la empresa se comprometía a pagar por plazos los salarios, fue rechazado por la asamblea de trabajadores del sábado 12 en Santa Perpètua. La plantilla exige el pago de las nóminas y planta cara a las maniobras de la dirección



de la empresa. Ni el ERE está justificado, ni las cuentas ni la gestión comercial están claras. La gestión de Panrico da más la impresión de un saqueo que de un "intento de reflotar" la marca.

CiU responde con la represión

El viernes 18 de octubre los Mossos intervinieron por segunda vez. En esta ocasión para que la empresa pudiera sacar parte de la producción que tenía almacenada. Trabajadores que participaban en el piquete en las puertas de la factoría fueron retenidos por la fuerza y amenazados. El relato del secretario comarcal de CCOO acerca del incidente que tuvieron con la policía al ir en coche hacia el piquete es muy elocuente: "nos obligó a detenernos de malas maneras y nos recibió con la siguiente expresión: '...vosotros sois tontos...' y cuando le solicitamos que se dirigiera con respeto y educación, su reacción fue retenernos, pedirnos la documentación y decirnos: '...ahora os voy a cachear y a registrar el vehículo, además de meteros una multa...' y sí... 200 euros de multa, lo que no logramos entender ni mi compañero ni yo es el motivo de la multa: '...desobedecer una orden en una situación de urgencia...'".

Como he comentado antes, no se desobedece en ningún momento, pero la situación de urgencia a la que se refiere el 'señor agente' era meter cuatro camiones en dirección contraria (o sea por donde circulábamos nosotros) para que llegaran a Panrico lo antes posible para cargar producto. ¿Eso es una situación de urgencia? ¿Abastecer el mercado de Donuts es una situación de urgencia?"

Despidos para los trabajadores, sueldos millonarios para los directivos

La estrategia de la empresa es jugar a fondo al chantaje y a la división entre las diferentes plantas. El consejero delegado ha planteado abiertamente que los centros "ganadores" serán aquellos que pacten un mejor ajuste salarial. Globalmente, aunque ha reducido ligeramente sus objetivos de despidos y de reducción salarial los planes siguen siendo salvajes e inaceptables, cebándose especialmente en las dos factorías en las que los trabajadores tienen mejores condiciones laborales (Santa Perpètua y Paracuellos), en ellas los despidos alcanzarían al 75% de los empleados. En Santa Perpètua quedarían sólo 99 de los 351 trabajado-

res actuales. Para los no despedidos la rebaja salarial media (en todos los centros) sería del 25%. Mientras, los directivos de Panrico se autoasignan excelentes retribuciones: 4,7 millones de euros en 2012, un 43% más que el año anterior. Los altos ejecutivos de la sociedad matriz aún se los subieron más, un 67% (4 millones).

Los planes del fondo de inversión Oaktree parecen ir en la dirección de vender la empresa rápidamente una vez la hayan exprimido y recortado. El "plan de viabilidad" no es más que un plan de choque para someter a la plantilla a unas condiciones draconianas, con las que vender la marca a algún grupo industrial atraído por la renovada "rentabilidad" de la empresa.

Por una huelga general en el Vallès Occidental

La huelga indefinida en Santa Perpètua va ya por su cuarta semana. La solidaridad de la clase trabajadora ha llegado desde mil y un sitios diferentes. Desde la comarca, Vallès Occidental, castigada especialmente por los despidos y los EREs (solo Santa Perpètua ha visto como cerraban 195 empresas en esta crisis), pero también desde otras muchas zonas del estado. Los donativos para la caja de resistencia de la huelga también son un buen indicativo de este apoyo solidario.

Los sindicatos (CCOO, UGT, CGT) tienen que dar una batalla seria para extender la huelga a todas las factorías, unificando la lucha sobre un planteamiento claro y rotundo: no aceptar ningún despido ni ninguna reducción salarial en ninguna planta. Es la única manera de poder hacer frente a los ataques y a las descaradas maniobras divisionista de la empresa. Y en cada zona, hay que implicar a toda la comarca en la lucha. ¡Ya basta de despidos y EREs! Ahora mismo, ya hay condiciones para convocar una huelga general en el Vallès Occidental por el empleo y en contra de los despidos en Panrico. Con la lucha conjunta de toda la clase trabajadora podemos impedir que los planes criminales de los capitalistas se lleven a cabo.

José Rodríguez Ruano
CGT · Valoriza Sector 3

Hace pocas semanas nuevas empresas se hicieron con el servicio de cuidado y mantenimiento de jardines y con el de limpieza viaria de Madrid. El presupuesto ha sido reducido en un 30%. En estas condiciones las empresas en connivencia con el ayuntamiento de Madrid (del PP) empezaron con despidos, saltándose descaradamente la ley. Cuando un servicio cambia de empresa está obligada a absorber a todos los trabajadores y en las mismas condiciones laborales que en la anterior empresa. Sin embargo, de entrada, despidieron a cerca de 300 operarios. Poco después anunciaron un ERE que supone el despido de 1.144 jardineros y trabajadores de limpieza viaria. La alternativa que proponen es que aceptemos una bajada salarial del 40% y la renuncia a toda una serie de conquistas sociales en lo que se refiere a vacaciones, jornada, etc. Tanto la patronal como el ayuntamiento quieren hacer trabajar más a menos trabajadores.

La huelga, iniciada el 5 de noviembre, es el único camino que nos dejan. Planteamos que esta sea indefinida porque somos conscientes de que la única forma de doblegar la coalición empresas-ayuntamiento es con una movilización contundente.

Huelga indefinida de jardineros y limpieza viaria en Madrid. Estas son las razones



Exigimos trabajar en condiciones dignas, con un salario digno, para poder ofrecer un buen servicio y contribuir con él a que nuestros barrios sean lugares con calidad de vida.

Los salarios del sector en estos momentos oscilan entre los 900 y 1.100 euros, para trabajadores con familias, hipotecas, etc.

La complicidad de las empresas y del ayuntamiento es cristalina. Cuando se produzcan los ajustes, como ya hemos visto en

otros casos, esas contrataciones se revisarán al alza, los trabajadores no veremos nada y solo servirán para aumentar los beneficios de las empresas.

Madrid está ya sucia y las zonas verdes están muy deterioradas. Para las empresas la prioridad es la obtención de beneficios y estos se mantienen a costa de los trabajadores y del propio servicio con la complicidad del ayuntamiento, que se empeña en mantener mediante la subcontratación de

estos trabajos un abundante canal de traspase de dinero público a manos privadas.

El ayuntamiento en un intento desesperado de boicotear la huelga ha establecido unos servicios mínimos del 40% de los trabajadores a pie de calle para el Servicio de Limpieza y el Servicio Especial de Limpieza Urgente (Selur) y del 25% para el mantenimiento de zonas verdes y conservación de áreas infantiles, de mayores y para el mobiliario urbano.

La clave para doblegar al ayuntamiento y a la patronal es conseguir el apoyo de los trabajadores de todos los sectores y de los ciudadanos en general. Por esta razón desde nuestra sección sindical estamos promoviendo una campaña de reparto de panfletos explicando las razones que nos llevan a ir a la huelga, pidiendo el apoyo activo de todos los trabajadores. También estamos planteando al comité de huelga central que se establezca una caja de resistencia para poder tener una base más fuerte para afrontar esta lucha.

¡Sí se puede!
¡Juntos podemos!

Eloy Val

El cierre de Fagor Electrodomésticos, empresa líder de MCC (Grupo Mondragón), supondrá la destrucción de más de cuatro mil empleos directos y miles indirectos en todo el País Vasco. Ni la dirección del Grupo cooperativo Mondragón, ni el Gobierno de Urkullu (PNV) ni el de Rajoy (PP), han sido capaces de ofrecer una solución a los miles de trabajadores que perderán sus empleos y sus ahorros tras la crisis del buque insignia del llamado “cooperativismo vasco”.

En el momento de acabar este artículo y coincidiendo con el anuncio del cierre definitivo de Fagor Electrodomésticos, cuyas pérdidas acumuladas durante cuatro años suman 960 millones de euros, y de Edesa, con planta en la localidad vizcaína de Basañari, miles de manifestantes recorren las calles de Mondragón en defensa de sus puestos de trabajo y exigiendo una solución al PNV. La dirección del Grupo dice que reubicará a los excedentes, 1.650 socios, pero los trabajadores saben que probablemente serán los mismos directivos que han abocado a la empresa a la catástrofe.

El llamado modelo “cooperativista vasco”: empresas capitalistas con otro nombre

MCC está formada por 289 entidades de las que 110 son cooperativas y 147 sociedades filiales. 68.000 personas trabajan en empresas del grupo Mondragón fuera del País Vasco: 4.272 en Galicia, 2.645 en Andalucía, 2.808 en Madrid, 1.700 en Valencia, etc. El temor de los trabajadores afectados es que la crisis de Fagor Electrodomésticos, con un total de 5.600 empleados repartidos en trece fábricas, produzca un efecto dominó en otras empresas del Grupo MCC. Si se ven afectados gravemente Eroski y la Caja Laboral el efecto dominó se multiplicará. En el corto plazo, el cierre de Fagor Electrodomésticos acarreará la pérdida de más de 10.000 empleos, de ellos 4.000 en el País Vasco sumando la pérdida de empleo directo y diferido.

Lagun Aro, la aseguradora del grupo que se encarga de cubrir el desempleo de sus socios trabajadores que figuran como autónomos y por tanto sin derecho a desempleo por vía ordinaria, carece de fondos para garantizar su subsidio. Así, además del empleo perderían cada uno los 12.000 euros que depositaron para hacerse socios, aparte de los ahorros depositados en aportaciones voluntarias y los préstamos de socios inactivos y colaboradores (por valor de 87 millones de euros, según la plataforma de afectados Ordaindu).

La dirección del consorcio Mondragón, históricamente vinculada al PNV, multiplicó por cinco sus empleados desde 1987, pasando de tener 20.818 a contar con 103.731 trabajadores en 2007. Era la época en que el ejemplo del llamado “cooperativismo vasco” se estudiaba como modelo de “producción social” en las universidades norteamericanas y se promovía como alternativa a las ideas del socialismo marxista en Sudáfrica y América Latina. Con la crisis vinieron los sacrificios y los despidos de más de 20.000 trabajadores sin resolver el problema de fondo.

El 1 de diciembre de 2008, el presidente del Grupo MCC, Jose María Aldekoa, pidió a sus 260 cooperativas que llevaran a cabo cierres y ajustes de plantilla ante una crisis que duraría años. La dirección exigió a los trabajadores incrementos de horas de trabajo y de calendarios laborales priorizando la productividad, al tiempo que se reducían los salarios, se eliminaban o congelaban pluses, se perdían pagas extras y se pedía a los socios trabajadores que pusiesen

Una estafa en toda regla ¡No al cierre de Fagor Electrodomésticos!



sus ahorros a disposición del Grupo cooperativo. Es decir, que el modelo cooperativo funcionaba exactamente igual que el resto de las empresas capitalistas que competían en una economía de “libre mercado”.

Los responsables directivos de Eroski, Fagor y Caja Laboral, igualmente vinculados al PNV, no tuvieron escrúpulos a la hora de solicitar ahorros a familias trabajadoras vascas, abusando de la buena voluntad, simpatía y apoyo al “modelo cooperativo” que vendían, lo que más tarde es conocido como el caso de las preferentes vascas. Cientos de ahorradores estafados por Eroski (660 millones de euros) y Fagor (185 millones) luchan por recuperar su dinero.

Eroski amplió en 2012 nada menos que en 3.695 los nuevos socios cooperativistas. Para ser socio cooperativista se pedía estar seis meses trabajando en período de prueba; ha habido trabajadoras que han trabajado gratis durante meses pasando por los distintos puestos y después han tenido que pagar 12.000 euros para comprar su empleo. Parece evidente que esta ampliación repentina del número de socios respondía a un afán claramente recaudatorio con el fin de financiar las operaciones del grupo y enjuagar pérdidas aplazando y acumulando futuros problemas. Más recientemente, ante las crecientes dificultades de Fagor, el gobierno vasco prestó 40 millones de euros, que ahora el lehendakari del PNV Urkullu reclama; y las cooperativas del grupo, en mayo de 2013, aportaron 70 millones de euros más al Fondo de Reestructuración y Empleo Societario (FRES). En total la deuda de Fagor alcanza como hemos señalado los 960 millones de euros y la preocupación de los socios trabajadores, además de perder su trabajo, las aportaciones que realizaron y los fondos que pusieron, es tener que responder con su propio patrimonio a las deudas pendientes de saldar.

Mientras la dirección peneuvista del Grupo Mondragón clamaba a los cuatro vientos las ventajas del cooperativismo como modelo de economía social, desde sectores de la dirección de la izquierda abertzale se fue incluso más allá, defendiéndolo como modelo del “socialismo identitario vasco”, un modelo de solidaridad y coparticipación en la empresa, pero donde la realidad era bien diferente: los sindicatos obreros no pintaban nada, mientras que los dirigentes de las cooperativas abrían empresas con bajos salarios y condiciones de trabajo extenuantes en el propio País Vasco y en otros lugares como por ejemplo en India, China, Polonia, Brasil, etc., aprovechándose de la mano de obra barata. Uno de los secretos que mejor ha escondido la dirección de MCC es la cuantía de esta mano de obra y sus condiciones de explotación.

El cooperativismo no es la alternativa al capitalismo ni a la crisis ni al paro

La crisis de Fagor ha puesto en cuestión la viabilidad del cooperativismo, cuyo nacimiento, evolución y crisis hay que enmarcarlo en el contexto real de desarrollo del capitalismo y de la lucha de clases. Lo que más tarde sería el Grupo Mondragón nació en plena dictadura franquista. En febrero de 1941, el obispo de Vitoria envió a dicha villa al joven párroco José María Arizmendiarieta, creador del grupo y vinculado al PNV con la misión de impulsar la obra de la Acción Católica en esta localidad y, más concretamente, acercarse a la juventud del municipio y liberarla de las ideologías de origen marxista presentes en la zona, con una fuerte presencia de obreros socialistas y comunistas en la Unión Cerrajera.

La dirección del PNV potenció el cooperativismo como una forma de convertir en “capitalistas” propietarios a los trabajadores y alentar el antisindicalismo y apoliticismo. Para el PNV el cooperativismo implica la supresión de la lucha entre las clases a través de la colaboración entre directivos y trabajadores de las cooperativas y en la autoexplotación voluntaria de los cooperativistas. Además, la burguesía vasca presentaba ante el mundo el modelo cooperativista como un elemento más de la identidad nacional vasca. En realidad, el Grupo Mondragón en manos del PNV ha sido, con su universidad, un arma ideológica de primer orden para extender las ideas neoliberales.

La lucha de clases existe fuera de las cooperativas y también dentro. En el pueblo de Mondragón conocen bien las polémicas que se desatan ante cada convocatoria de huelga general. Los trabajadores de las cooperativas durante años estuvieron al margen de luchas como la del convenio del Metal provincial y de otras luchas laborales; sin embargo es importante destacar que apoyaron la huelga general unitaria del 29 de marzo de 2012 contra el Gobierno del PP. Permanentemente ha habido una confrontación entre los directivos y los socios trabajadores por ampliar el abanico salarial, esto es, la diferencia entre quienes más cobran y los puestos peor remunerados. Los directivos de Fagor viven como los directivos de muchas empresas capitalistas y los trabajadores socios en su mayoría sobreviven con salarios incluso menores de los que se cobran en empresas capitalistas.

La lucha de los trabajadores de las cooperativas, eventuales, socios y no socios por defender sus puestos de trabajo, es la misma lucha del conjunto de la clase trabajadora contra la crisis capitalista, contra los recortes y los ataques a nuestras condiciones labora-

les y de vida, por acabar con este régimen capitalista de injusticia social. La alternativa a la explotación capitalista no pasa como defienden los reformistas —también los que hay en sectores de la dirección de la izquierda abertzale— por ir construyendo cooperativas comiéndole poco a poco el terreno a las empresas capitalistas, porque las empresas privadas capitalistas, muchas de ellas asociadas con la banca, cuentan con recursos muy superiores a los de las cooperativas.

Las cooperativas han demostrado en teoría que las fábricas pueden producir sin patronos, pero la alternativa no es, como ha pretendido el PNV, convertir en patronos a todos los obreros, aniquilar las organizaciones sindicales y políticas de la clase trabajadora y separarlos de sus hermanos de clase. La experiencia cooperativa cobra sentido cuando da confianza a los trabajadores en sus propias fuerzas, los prepara en el control y dirección de la producción y eleva su nivel de conciencia para comprender que el modelo de economía socialista por el que lucha la clase trabajadora excluye la explotación de unos trabajadores por otros y también la competencia entre distintas cooperativas privadas como ocurre en la actualidad. De lo que se trata es de que los medios de producción social sean propiedad colectiva mediante la nacionalización de las cooperativas, de la banca, los grandes monopolios y latifundios bajo control democrático de la clase trabajadora que representamos la mayoría de la sociedad. Con las principales palancas de la economía en nuestras manos sería posible llevar a cabo la planificación democrática de la economía acabando con la anarquía y las crisis del capitalismo y con las lacras que este produce: paro masivo, pobreza, miseria y violencia.

Sí hay dinero, y mucho, pero sólo para los banqueros y especuladores. Por eso la lucha en defensa de los puestos de trabajo de Fagor y Edesa, del futuro de miles de familias trabajadoras, debe ser planteada de manera concreta: salvar a las personas y no a los bancos. ¡Nacionalización bajo control obrero de Fagor y de Edesa, salvar todos los puestos de trabajo, y acabar con el latrocinio de los directivos y gerentes!

¡Defender todos los puestos de trabajo!

¡Nacionalización de Fagor bajo control obrero!

En www.elmilitante.net puedes leer la versión completa donde se desarrolla la parte teórica del cooperativismo desde un punto de vista marxista y se da más información sobre el desarrollo del Grupo Mondragón.

Carlos Armengol, Antonio Dionisio y Paco Fornell
Vicepresidente, presidente y delegado sindical de CCOO de SDS

¡No al traslado forzoso de 72 trabajadores! ¡SDS ni se traslada ni se cierra!

El 11 de octubre la junta directiva de SDS presentaba al comité de empresa un plan para trasladar una parte de la plantilla de la factoría del Puerto de Santa María (Cádiz) a Sevilla. Tras este grave ataque a nuestras condiciones laborales, lo que realmente se esconde es la intención de cerrar SDS. El comité y la plantilla no nos hemos quedado de brazos cruzados. En una multitudinaria asamblea los trabajadores decidimos responder al mayor ataque que hemos sufrido hasta ahora con una jornada de huelga el 23 de octubre y otra huelga de 48 horas los días 29 y 30 de octubre.

Las tres jornadas de paro han sido secundadas con un 90% de seguimiento y con una implicación extraordinaria del conjunto de la plantilla, demostrando que hay fuerzas para ganar esta batalla y paralizar los planes de la empresa. El 23 de octubre unificamos nuestra lucha con la educativa, llevando nuestra pancarta junto al Sindicato de Estudiantes en la manifestación estudiantil. En la segunda jornada de huelga, el día 29, realizamos 8 piquetes en las principales localidades de la bahía y las principales empresas: Navantia, Bazán y Airbus. Y, el 30 de octubre, organizamos concentraciones en el Parlamento andaluz y ante las empresas Endesa, Ayesa y Sadiel con una participación masiva de la plantilla.

Una privatización alentada por la Junta de Andalucía

SDS es una empresa de informática que nació como empresa pública y que paulatinamente ha ido perdiendo accionariado público hasta que hace un par de años fue adquirida en un 51% por Ayesa, propiedad del empresario sevillano José Luis Manzanares. Esta venta, que contó con la oposición del comité de empresa y en la que fue adquirida por poco más de 15 millones de euros, puso en evidencia las buenas relaciones de este empresario con la cúpula del PSOE andaluz, que no dudó en facilitar sus negocios privados desde la Junta de Andalucía. Las nefastas consecuencias de la privatización tanto para SDS como para Sadiel, la empresa matriz, fueron no pocas veces denunciadas



por el comité de empresa y la plantilla. Igualmente, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, y en general la Junta, ignoró las peticiones de los representantes de más de 1.400 trabajadores de conocer el futuro de la empresa y exigir que de realizarse la venta se garantizase por parte de los nuevos propietarios el empleo y las condiciones de trabajo.

Cuando finalmente Ayesa se hizo con el control de Sadiel, su primera acción fue desprenderse de 20 trabajadores alegando causas objetivas, que aún no han sido demostradas más allá de lo escrito en las cartas de despido. La táctica de meter la tijera en los derechos de los trabajadores y en el empleo con la excusa de la crisis no se ha hecho esperar. Se pretende que los trabajadores que hemos producido jugosos beneficios durante años aceptemos ser sacrificados para garantizar aún más ganancias a otra empresa más poderosa.

Las verdaderas intenciones de la empresa: cerrar SDS

El historial de explotación de los dueños de Ayesa no deja lugar a dudas. Para aumentar sus beneficios han precarizado y empeorado las condiciones laborales constantemente. Mientras que desde 2011 el grupo se ha embolsado más de dos millones de euros en dividendos y recibido más de 600.000 euros en ayudas públicas, solo en la factoría

de El Puerto de Santa María se han perdido 30 puestos de trabajo, se ha modificado el horario empeorando las condiciones y la conciliación de los trabajadores, se han realizado más de 6.000 horas extraordinarias y se han intentado toda clase de recortes para que su margen de beneficio sea todavía más cuantioso.

Ahora la dirección de la empresa plantea una nueva vuelta de tuerca que pone a todos los trabajadores de SDS en la picota: el traslado permanente de unos 70 trabajadores a Sevilla escudándose en la falta de carga de trabajo. Realmente tras este ataque a lo que nos enfrentamos los trabajadores de la factoría es a que se abra la puerta a la rescisión de nuestros contratos, debido a las dificultades económicas y personales, en algunos casos insalvables, de abandonar nuestra vida en Cádiz para trabajar en Sevilla. Y, por otro lado, se suma su plan de ahorro de costes de las instalaciones y trabajadores de SDS en Cádiz. Todo apunta a que como las subvenciones y ayudas públicas se acaban las cuentas son más jugosas cerrando SDS en Cádiz.

Tras el éxito de las primeras 72 horas de huelga, nuestro objetivo es avanzar hacia una movilización y una huelga conjunta de las plantillas de Sadiel, Ayesa y SDS. Una huelga que nos permita paralizar toda la producción y demostrar a los empresarios que no estamos dispuestos a tolerar que se juegue con nuestros empleos y nuestras vi-

das de manera impune, y que nos permita defender nuestros puestos de trabajo y los derechos que hemos conseguido los trabajadores tras muchos años de lucha.

¡Sí se puede! Luchando todos juntos podemos vencer

Pero, junto a los empresarios, no olvidamos que la Junta de Andalucía, que permitió la venta de la empresa, es también responsable directa de los ataques que los trabajadores estamos sufriendo tras la privatización. Tiene que tomar nota de la ejemplar lucha de los trabajadores de la plantilla y no permitir que en Cádiz, con un 36% de paro, se siga destruyendo empleo. Por ello, exigimos a la Junta de Andalucía, es decir, al PSOE y a IU, que se posicionen con los trabajadores y ponga freno a las pretensiones de Ayesa de trasladar a los trabajadores, garantizando empleo de calidad y carga de trabajo. El trabajo que realizamos es útil y rentable, si los empresarios son incapaces de garantizarlo, la Junta debe expropiar la empresa sin indemnización para asegurar que se mantienen todos los puestos de trabajo.

Los ataques a los trabajadores de SDS no se diferencian de los que sufren en otros muchos sectores. Responden a una misma estrategia por parte de los empresarios que están intentando hacer su agosto con la excusa de la crisis. En la provincia de Cádiz padecemos especialmente esta dolorosa realidad: desindustrialización, precariedad y continuos cierres de empresas, como el caso de Visteon, Vicasa, Gadir Solar, Alestis, la pérdida de empleo en Navantia y sus subcontratas... Nuestra lucha es la misma lucha de otros colectivos que buscan que Cádiz no se convierta en un páramo de paro y contratos basura. Somos conscientes de que la única manera de detener las agresiones patronales y el goteo de despidos y recortes es la unidad y la contundencia en la lucha. Los dirigentes de CCOO y UGT tienen una responsabilidad tremenda y deben unificar todas las luchas que ya se están dando. Por ello, el panfleto que estamos repartiendo los trabajadores de SDS exige la convocatoria de una huelga general de toda la provincia en defensa del empleo.

Sergio González
CCOO · Gijón

Multitudinaria manifestación en Gijón contra el cierre de Monroe-Tenneco

El 17 de octubre a las 19 horas salíamos en manifestación entre 10.000 y 15.000 personas en Gijón en defensa de los 230 puestos de trabajo de Monroe, filial de la multinacional estadounidense Tenneco Automotive, que recientemente y de forma sorpresiva anunciaba el cierre irreversible de la factoría gijonesa.

En la manifestación se respiraba un ambiente reivindicativo y de lucha. Aún hoy, más de dos semanas después, los barrios de la ciudad están llenos de carteles y pegatinas, tanto en paredes como en escaparates y en vehículos particulares, con la consigna "Monroe no se cierra".

Entre los asistentes a la convocatoria, se encontraban amplias delegaciones de los trabajadores de las factorías de Tenneco de Valencia y de Ermua, esta última con un paro de 24 horas convocado en solidaridad con los compañeros de la planta gijonesa. También estuvieron presentes multitud de organizaciones y colectivos sociales, además de los sindicatos CCOO, CSI, CGT y CNT. Sin embargo, pese a ostentar la presidencia del comité de empresa, USO



no envió ninguna representación oficial, como tampoco lo hizo la UGT.

Estas ausencias pueden deberse al hecho de que, desde el inicio del conflicto, el comité de empresa y la plantilla han rechazado que las federaciones sindicales sean quienes negocien con la empresa, y han convertido la asamblea de trabajadores en el órgano que toma todas las decisiones. Esta asamblea decidió que la reivindicación

principal sea la de oponerse al cierre de la planta gijonesa, no queriendo entrar a negociar indemnizaciones por despidos y así se lo hicieron saber a los miles de trabajadores que abarrotaban la plaza del Ayuntamiento al final de la manifestación.

La lucha de estos compañeros, es la lucha de David contra Goliat, ya que se trata de una multinacional implantada prácticamente en todo el mundo y que aprove-

chándose de la reforma laboral y la pérdida de derechos de los trabajadores, pretende deslocalizar la factoría gijonesa llevándosela a Rusia de manera irrevocable.

La historia de Monroe no puede convertirse en una más, como tantas que hemos vivido en Asturias, donde la fuerza y la voluntad de lucha de los trabajadores se van desgastando por la ausencia de un plan de movilizaciones serio y por el aislamiento. Hay que unificar este y el resto de conflictos del mismo sector, como Duro Felguera, y otros como la educación, la sanidad, los parados, etc., organizando un frente único de trabajadores con un propósito muy claro: no aceptar ni un solo despido, ni un solo recorte, ni un solo retroceso en nuestros derechos.

Como dijo el representante de la asamblea de trabajadores que habló al final de la manifestación: "esto no puede ser más que el principio" y señaló que esta lucha es parte de una mayor contra "un sistema injusto y miserable".

**Xaquín G^a Sinde, Javi Losada,
Carmen Sixto y Vicente Ferrer**
Miembros de la Comisión Ejecutiva de
CCOO Navantia-Ferrol, por el Sector Crítico

La asamblea de Navantia Ferrol rechaza masivamente el IV Convenio

El Sector Crítico de CCOO llama a la movilización de todas las factorías

La negociación del IV Convenio Colectivo Interprovincial de los astilleros Navantia ha derivado en una crisis sindical nunca vista en las distintas etapas por las que pasó nuestra empresa (que hoy es Navantia, ayer era Izar y anteayer fue Bazán y AESA). La negociación del convenio ha generado una fuerte división en los sindicatos, especialmente en CCOO, el mayoritario. Pero el terremoto sindical provocado por el convenio tiene un significado que va mucho más allá de Navantia; refleja corrientes de fondo en el seno de la clase obrera que apuntan hacia una nueva fase en la lucha de clases.

El inicio de toda esta situación se puede establecer en el 10 de julio, cuando los representantes sindicales en la comisión negociadora del convenio, sin consultar ni informar a nadie, le presentaron a la empresa una contrapropuesta que significaba renunciar a muchos de los derechos recogidos en nuestro convenio.

Los trabajadores de Ferrol obligan al comité a convocar una asamblea

A finales de agosto, a la vuelta de las vacaciones de la factoría de Ferrol, el comité de empresa organizó una ronda de asambleas parciales por toda la factoría, en las que el Sector Crítico de CCOO denunciábamos el contenido de la contrapropuesta y exigimos la celebración de una asamblea general para que los trabajadores pudiesen pronunciarse sobre la misma. La respuesta del comité fue que las asambleas generales las convocaba él cuando lo estimaba oportuno y que ahora no lo estimaba.

Así las cosas, el lunes 2 de septiembre el Sector Crítico de CCOO anunció una recogida de firmas para exigirle al comité esa asamblea general. La reacción de los oficialistas de CCOO fue convocar una reunión de afiliados al día siguiente, donde realizaron una votación plebiscitaria sobre su actuación en el convenio, que salió aprobada. Pero la recogida de firmas tuvo un éxito arrollador (en menos de dos días firmó el 42% de la plantilla que estaba trabajando) y el comité se vio forzado a convocar una asamblea general, celebrada el 10 de septiembre. La votación no dejó lugar a dudas: la aplastante mayoría de los trabajadores rechazamos la contrapropuesta sindical en la mesa negociadora del convenio; de hecho, como más tarde reconocerían los oficialistas, la contrapropuesta (apoyada por ellos y por la UGT) tuvo menos votos en la asamblea general que en la reunión de afiliados de CCOO del 3 de septiembre.

'Punto de encuentro' verbal en las negociaciones

La negociación del convenio continuó y finalmente el 30 de septiembre se alcanzó en la mesa un "punto de encuentro" verbal. Los oficialistas de CCOO se lanzan inmediatamente a convencer de las bondades del supuesto consenso y convocan para el 2 de octubre una reunión de afiliados, donde se encuentran con una oposición furibunda de la base, que considera impresentable que pretendan poner a votación algo que no está escrito y que les exige más información y el aplazamiento de cualquier decisión hasta que no haya un texto. Sin entender nada, los oficialistas insisten en su error, y el día 4 inician una ronda de asambleas de afiliados por la factoría que son una mera repetición de la reunión del 2 y que sólo consigue que aumente su descrédito.



Desde el Sector Crítico no sólo rechazamos el contenido del "punto de encuentro", sino que dijimos que era una imprudencia fiarse de la palabra de la empresa. La respuesta oficialista fue muy clara: si el texto que envíe la empresa no responde a lo hablado, CCOO de Ferrol no lo firmará.

La duda se despejó el 8 de octubre. Justo tras finalizar una nueva reunión de afiliados de CCOO, que contó con la participación de la Federación de Industria estatal y donde la dirección oficialista había conseguido aprobar por estrecho margen el "punto de encuentro", saltó la sorpresa: el texto enviado por la empresa se parece muy poco a lo explicado por los oficialistas en la última semana (y, evidentemente, las diferencias no favorecían a los trabajadores). Atrapados por su discurso, en la reunión de negociación del día siguiente no les queda más remedio que rechazar el texto de la empresa. Tras diversas vicisitudes, el 16 de octubre los negociadores de CCOO, menos el de Ferrol, y la UGT firman un preacuerdo con la empresa.

El conejo del 'compromiso tácito'

Así las cosas, el jueves 19 hay otra asamblea de afiliados de CCOO, de nuevo con presencia de la Federación estatal, que viene a reforzar el intento de los oficialistas locales para convencer a los afiliados. Pero su "argumento" es sacarse un conejo de la chistera: el preacuerdo podría valer si la empresa adquiere el "compromiso tácito" de dejar participar a los sindicatos en la elaboración del plan estratégico que la empresa presentará el 4 de diciembre. La posición del Sector Crítico es clara: "No sabemos si el PP adquirirá o no ese compromiso. Podría ser porque soportar la participación de algunos representantes sindicales en la elaboración del plan es un precio insignificante a cambio de una claudicación sindical en toda regla. Pero estamos seguros de una cosa: excepto que esos representantes asuman sus propuestas, el PP no les hará ni el más mínimo caso, serán unos invitados de piedra que sólo servirán para que el PP consiga hacer desaparecer nuestros derechos sin sufrir ningún desgaste". La reunión pone de manifiesto que tanto la Federación estatal como los dirigentes oficialistas arden en deseos de que los afiliados traguen y acepten los recortes. No se votó el preacuerdo porque el secretario general alegó que no había ninguna prisa.

Para sorpresa general, el martes 24 convocan una nueva reunión de afiliados, don-

de la calma del día 19 se transforma en prisa: hay que votar el preacuerdo, hay que hacer público el no de CCOO de Ferrol inmediatamente, hay que celebrar cuanto antes la asamblea general de la factoría... Esta asamblea general se celebró el 29 y sólo pidió el sí al preacuerdo UGT, apoyada por unos 20 de los 1.200 trabajadores asistentes; a favor del no se levantó un mar de brazos. Por el contrario, las factorías de Cádiz, San Fernando y Puerto Real ya se pronunciaron por el sí, aunque en el caso de Puerto Real de forma harto dudosa (el comité de empresa repitió la votación tres veces, hasta que en la tercera pudo decretar que parecía que ganaba el sí, además de que el jefe de Personal habló en la asamblea a favor del sí; si los dirigentes sindicales de CCOO y UGT de Puerto Real tuviesen algo de dignidad, hubiesen preferido perder la votación antes de ganarla con el apoyo activo de la empresa).

El proceso de asambleas generales de las factorías continuará este mes. Especial importancia tiene Cartagena, donde en septiembre ha surgido el Colectivo de Insumos de CCOO, que rechaza el convenio y que cuenta con el apoyo de destacados militantes históricos de la sección sindical. De hecho, el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de Cartagena, trabajador en activo de Navantia, habló en una asamblea general en contra del convenio, abriendo así un conflicto en CCOO en el que también intervinieron los secretarios generales regionales de la Federación de Industria y de CCOO de Murcia.

Un punto de inflexión sindical

El ambiente que se vive en Ferrol se debe a diversas razones, entre ellas las tradiciones combativas de la factoría y el papel del Sector Crítico de CCOO con una clara influencia marxista. Pero tuvo un papel decisivo la asamblea general de las firmas del 10 de septiembre, que marcó un punto de inflexión, por dos razones: 1) Los trabajadores se dieron cuenta de que se puede obligar al comité a cambiar sus decisiones; 2) Evidenciado que el rechazo a la actitud claudicante del comité no era una cuestión de círculos minoritarios de la plantilla, sino de la inmensa mayoría de los trabajadores.

A partir del 10 de septiembre, los oficialistas de CCOO de Ferrol nadaron contra la corriente. De hecho, la causa de que no firmasen el preacuerdo no fueron sus convicciones. En realidad son como sus colegas de las otras factorías y tienen las mismas ganas

de firmar el convenio, pero el ambiente entre los trabajadores ferrolanos se lo impide.

Ya veremos qué pasa finalmente. Pero, en caso de firmarse el convenio, nuestra alternativa no va a ser reivindicar un convenio de factoría, como ya planteó la CIG en Ferrol. En el plazo de un mes está anunciando un plan de ajuste para Navantia. No es el momento de malgastar el tiempo y las energías. Como está defendiendo el Sector Crítico, no es suficiente con decir no a este convenio. Hay que concentrar todos los esfuerzos en prepararnos para ese plan, iniciando desde ya un calendario de movilizaciones conjuntas de todas las factorías con acciones de todo tipo (manifestaciones, encierros, marchas, ocupaciones de edificios públicos, boicot a plenos municipales...) que sirvan para preparar una huelga general conjunta en nuestras comarcas, dentro de un plan ascendente de lucha en el que se incluya una marcha a Madrid. Los trabajadores de Navantia, por nuestro número y capacidad de organización, podemos y debemos abrir un nuevo frente de lucha contra el desgastado gobierno del PP, como lo fue el año pasado el conflicto minero y actualmente lo está siendo la lucha de la comunidad educativa, con la que los trabajadores de Navantia en la ría de Ferrol nos manifestamos durante la huelga general de la enseñanza del 24 de octubre.

Estamos seguros de que si esta alternativa llega a los compañeros del resto de las factorías, la asumirían porque el ambiente existente entre amplios sectores de los trabajadores de Navantia en Ferrol, Puerto Real o Cartagena responde a un proceso general en el seno de la clase obrera.

Pero a que el ambiente latente entre los trabajadores salga a la superficie puede ayudar mucho que los sectores sindicales combativos intervengamos en la situación de forma organizada. Como ya dijimos, la oposición casi total en Ferrol a la firma del convenio responde a factores diversos. Pero no se explicaría sin la intervención del Sector Crítico de CCOO, como hasta la prensa local reconoce. Así lo recogía un editorial titulado 'Panorama sindical en Navantia' del *Diario de Ferrol* del 27 de octubre: "Una decisión, la de Ferrol, que, cabe recordar, ha estado propiciada por el sector crítico de CCOO, que encontró el amplio respaldo de los trabajadores". Los dirigentes sindicales están siguiendo una política nefasta. La única manera de luchar contra una mala política es luchar por una buena. No es hora de lamentarse, sino de organizarse para luchar.

20-N Huelga general estudiantil!

¡No a la LOMCE! ¡Fuera los recortes!



Sindicato de Estudiantes

El 22, 23 y 24 de octubre hemos hecho historia. En la tercera jornada de huelga general estudiantil, la suma de los profesores, padres y madres paralizó toda la enseñanza pública en una demostración de fuerza sin precedentes: más de dos millones de personas llenamos las calles en más de setenta manifestaciones.

El mensaje lanzado por el Sindicato de Estudiantes de unificar la lucha contra la LOMCE, por la devolución de los 6.000 millones de euros que han robado a la escuela pública con los recortes, por la readmisión de los 50.000 profesores despedidos, contra el tazo y el decreto de becas y por la dimisión del ministro Wert, es el camino.

La unidad en la lucha de toda la comunidad educativa, de la clase trabajadora y la juventud ha puesto contra las cuerdas al ministro que pretende devolvernos a las cavernas educativas del franquismo, demostrando que está completamente solo y que la mayoría de la sociedad está radicalmente en contra de sus planes para destruir la educación pública.

El ministro Wert y la multimillonaria secretaria de Estado de Educación, Montserrat

Gomendio, han hecho el ridículo más clamoroso. En un intento patético de minimizar una movilización masiva, el mismo día 24 de octubre realizaron un vídeo insultante contra la comunidad educativa en el que "agradecían a los profesores, padres y alumnos por no secundar a huelga".

Wert, en minoría absoluta

La realidad ha sido todo lo contrario de lo que han intentado describir estos mentirosos profesionales. Las manifestaciones en defensa de la enseñanza pública que han recorrido las calles de cientos de ciudades y localidades no tienen precedentes. En Madrid, más de 300.000 estudiantes, profesores, y padres y madres colapsamos el centro de la ciudad, desde Atocha hasta prácticamente la Puerta del Sol. Cuando se estaba procediendo al acto final en la calle Alcalá pasado el Ministerio de Educación la manifestación todavía discurría por la Plaza de Neptuno. En dicho acto Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, dijo que "el derecho a la educación pública lo arrancaron nuestros padres y nuestros abuelos en las luchas de los años setenta. Nadie nos lo regaló. Fue el fruto de la movilización de millones, de una

generación de luchadores, la que lo hizo posible. Y ahora que nos quieren arrancar este derecho tenemos que pelear igual que entonces, con la misma fuerza y la misma confianza. Antes había una dictadura y ahora hay un gobierno del PP. Pero somos mucho más fuertes que ellos. Por eso desde el Sindicato de Estudiantes decimos: si mañana el ministro Wert no dimite, si no retira la LOMCE y todos los ataques y recortes, proponemos a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, a los compañeros de CCOO, UGT, STEs, CGT y CEAPA, a todas las organizaciones y colectivos, organizar una nueva huelga general educativa pero esta vez de 72 horas, para triplicar nuestra fuerza. Este es el único camino para lograr defender nuestro derecho a una enseñanza pública de calidad, gratuita, laica y democrática...", conectando totalmente con el sentir general de la manifestación.

Las manifestaciones fueron multitudinarias y transcurrieron en un ambiente de mucha combatividad y ánimo. En la de Barcelona, que se celebró por la mañana, se congregaron más de 200.000 personas. Más de 300.000 en las capitales y localidades de Andalucía, de 200.000 en las ciudades del País Valencià.

(PASA A LA PÁGINA 7)

Únete a la corriente marxista agrupada en el periódico obrero EL MILITANTE y lucha con nosotros por una alternativa socialista:

- Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial. Contra el desempleo: reparto del trabajo.
- Jubilación a los 60 años con el 100% del salario con contratos de relevo, manteniendo la estabilidad en el empleo.
- No a la precariedad laboral. Fijo a los quince días. Por trabajo periódico, contratos de fijos discontinuos.
- Salario Mínimo de 1.100 euros al mes a partir de los 16 años.
- No a la reforma laboral.
- Defensa de la empresa pública. No a las privatizaciones. Planes de inversión y renovación tecnológica que garanticen todos los puestos de trabajo.
- No a la discriminación de la mujer trabajadora. A igual trabajo, igual salario.
- Defensa de la sanidad pública. No a la privatización.
- Por una red educativa pública, única, laica, gratuita, científica y de calidad. 7% del PIB para la educación pública.
- No a los recortes en el subsidio de desempleo.
- Un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual al SMI hasta encontrar trabajo.
- Vivienda digna. Nacionalización de las grandes empresas constructoras y municipalización del suelo urbano para acometer la construcción de un millón de viviendas sociales en los próximos cuatro años.
- Ninguna restricción en nuestros derechos de expresión, reunión y huelga. No a la Ley de Partidos.
- Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Por una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas.
- Depuración de los elementos reaccionarios del aparato del Estado. Control por parte de los sindicatos obreros de las academias militares y de policía.
- Ninguna discriminación en el empleo por edad, sexo o nacionalidad. Derogación de la Ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los inmigrantes.
- Expropiación de las empresas que se declaren en quiebra o en suspensión de pagos, bajo control obrero.
- Nacionalización de la banca, la tierra y los monopolios sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, y bajo control obrero. De esta forma se podría planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.

¡Suscríbete! Apoya la prensa obrera



Suscripción anual ▶ 11 números

	Normal	Ayuda
Estado español	23 €	35 €
Resto del mundo	35 €	47 €

Envía tus datos y un Giro Postal al Apartado de Correos 5.200, 28080 Madrid o comunícalo con nosotros a través del formulario de suscripción que aparece en nuestra web

Suscríbete

Recibe El Militante en tu casa
Apoya la prensa obrera



CONTACTA CON NOSOTROS

ANDALUCÍA
 • Cádiz 678 940 435
 • Granada 616 893 592
 • Málaga 952 276 563
 • Sevilla 619 745 685
ARAGÓN
 • Zaragoza 697 338 376
ASTURIAS 985 550 933
CASTILLA-LA MANCHA
 • Guadalajara 949 201 025
 • Puertollano 650 837 265
 • Toledo 699 956 847
CASTILLA Y LEÓN
 • Salamanca 653 699 755
CATALUNYA
 • Barcelona 933 248 325

• Girona 657 212 367
 • Tarragona 660 721 075
EUSKAL HERRIA
 • Álava 945 231 202
 • Guipúzcoa 625 707 798
 • Pamplona 635 919 738
 • Vizcaya 656 714 818
GALICIA
 • Compostela 679 500 266
 • Coruña 600 810 516
 • Ferrol 626 746 950
 • Vigo 636 217 248
MADRID 914 280 397
PAÍS VALENCIA 685 098 482

www.elmilitante.net • elmilitante@elmilitante.net